



Bulletin de l'Institut français d'études andines

ISSN: 0303-7495

secretariat@ifea.org.pe

Institut Français d'Études Andines

Organismo Internacional

Sánchez, Gonzalo

Guerra prolongada, negociaciones inciertas en Colombia

Bulletin de l'Institut français d'études andines, vol. 29, núm. 3, 2000

Institut Français d'Études Andines

Lima, Organismo Internacional

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12629302>

► Comment citer

► Numéro complet

► Plus d'informations de cet article

► Site Web du journal dans redalyc.org

redalyc.org

Système d'Information Scientifique

Réseau de revues scientifiques de l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne et le Portugal

Projet académique sans but lucratif, développé sous l'initiative pour l'accès ouverte

1. ACTORES Y DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO

“Si lo que se pretende es comprender la guerra moderna no hay que entrar sólo en el mundo de las víctimas, sino también en el de los pistoleros, los torturados y los apologistas del terror, los que conciben únicamente a los suyos como criaturas sagradas con derechos humanos”

Michael Ignatieff: *El honor del guerrero*

GUERRA PROLONGADA, NEGOCIACIONES INCIERTAS EN COLOMBIA

Gonzalo SÁNCHEZ G*

Resumen

Este artículo, destaca las transformaciones de la violencia en Colombia durante la década de los 90s. Muestra lo compleja e inmanejable que se ha vuelto, cómo ha pasado a ser hoy un fenómeno no simplemente nacional sino internacional, y cómo, a pesar de todos los obstáculos, puede ser superada.

Palabras claves: *Violencia, guerrillas, contrainsurgencia, delincuencia común, negociaciones de paz.*

GUERRE PROLONGÉE ET NÉGOCIATIONS DE PAIX INCERTAINES EN COLOMBIE

Résumé

Cet article s'attache aux transformations de la violence en Colombie au cours des années 1990. Il montre combien les phénomènes de violence sont devenus complexes et inextricables avec des dimensions à la fois nationales et internationales. En dépit de son acuité et de son caractère diffus, il estime que la violence peut trouver une solution pacifique et négociée.

Mots clés : *Violence, guérillas, contre-insurrection, criminalité de droit commun, négociations de paix.*

PROTRACTED WAR, NEVER-ENDING NEGOTIATIONS IN COLOMBIA

Abstract

This chapter assesses how the phenomenon of the violence has changed during the decade of the 1990s. It shows how complex and intractable the violence has become, how it is now an international problem, not simply a national one, and how, despite all the obstacles, it might be overcome. It pays special attention to the psychological and cultural implications of the violence.

Key words: *Violence, Guerillas, Counterinsurgency, Common crime, Peace negotiations.*

* Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales- IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. E-mail: gonzalo@colnodo.apc.org

INTRODUCCIÓN

Para la generación de colombianos nacidos en vísperas de la generalizada insurrección que siguió al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, su trayectoria de vida ha transcurrido bajo el signo de la violencia. Una violencia percibida a menudo como repetición, pero que de hecho ha significado una invasión progresiva de más y más espacios de la esfera pública y privada, a tal punto que no es un sinsentido afirmar que ella es el factor ordenador-desordenador de la política, la sociedad y la economía. Y esto en tiempos de globalización tiene desde luego efectos internacionales muy distintos a los de la violencia de los años cincuenta que, en el contexto de la Guerra Fría, pasó internacionalmente casi desapercibida.

En las últimas dos décadas el país ha vivido *una tensión no resuelta entre por lo menos dos dinámicas encontradas*. Por un lado, la de los impulsos a la relegitimación y fortalecimiento del Estado, con el *ethos* de la participación, la ciudadanía, y el pluralismo étnico y cultural, como *ethos* dominante, que se plasmó en la *Constitución* promulgada en 1991; y por otro lado, la del predominio creciente de la lógica de la guerra, el protagonismo de los actores privados en armas, la fragmentación y deslegitimación de las instituciones estatales, y la lucha en torno a la sociedad civil. Más aún, a esta última se la ve a veces como blanco de las acciones bélicas y otras como terreno por conquistar, en la medida en que se la pueda convertir por parte de los múltiples actores armados en un recurso táctico o estratégico para sus propios objetivos (1). En este contexto, incluso procesos democratizadores como el de la descentralización política han sido instrumentalizados por la indulgencia para incrementar sus recursos y para ejercer todo tipo de controles sobre las decisiones políticas y administrativas de muchos pueblos y regiones.

Pero la escalada del conflicto armado ha desencadenado, además, repercusiones múltiples a nivel internacional: en las fronteras, en los mercados de productos ilícitos, en la canalización de las ayudas económicas por parte de organismos multilaterales, en la alerta de gobiernos y ONGs sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y sobre los daños ecológicos que se derivan como consecuencia tanto de la expansión de los cultivos ilícitos (coca y amapola) como con los mecanismos aceptados —o que le imponen— para destruirlos (grifotas). Se entiende entonces que el país haya pasado crecientemente al centro de la atención mundial y que las opciones de esta súbita internacionalización negativa se den en torno al complejo movimiento pendular de la no necesariamente dicotómica pareja intervención-mediación. Desde distintas perspectivas se reclama la intervención internacional en temas como la creación de las condiciones de confianza para la negociación; la construcción de la agenda común; y la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Pero en cualquier caso, la internacionalización más reciente del conflicto colombiano no puede oscurecer los orígenes internos del mismo. Ni la guerrilla, ni el narcotráfico, ni la criminalidad en las proporciones que tiene hoy en el país se le pueden atribuir principal o exclusivamente a fuerzas externas. Esto sería no sólo negar las responsabilidades de actores específicos

(1) Sobre este tema, son muy sugestivos los ensayos de Uribe. Véase especialmente Uribe, 1997: 126-137.

en la configuración de la situación actual sino negar también las raíces históricas de la crisis colombiana, remontable por lo menos a la liquidación del movimiento popular que encarnó el gaitanismo y que la memoria colectiva colombiana reconoce como el *landmark* de su historia moderna. Es probable sí que las dinámicas de reproducción de las múltiples formas de violencia actuales tengan muy poco que ver con aquel remoto origen. Tampoco habría que pensar que la confrontación armada de hoy fuera la culminación inevitable de esos antecedentes históricos. No se trata del desenlace de una historia predeterminada, sino de un proceso social y político en el cual hay actores y motivaciones muy diversos tanto en la indulgencia como en los sectores dominantes, alianzas inestables y contextos internos y externos variables. Lejos estamos, pues, en Colombia, de la temática de la reconstrucción y de la reinserción de las viejas insurgencias que domina la agenda centroamericana (El Salvador, Guatemala), y lejos también de los debates continentales sobre el nuevo orden mundial y la seguridad en la post Guerra Fría.

El curso de acción, tanto interno como externo, frente al conflicto colombiano, depende en gran medida de los diagnósticos que se hagan sobre la dinámica de actores, escenarios y condiciones de aplicación de los sistemas internacionales de regulación de la guerra.

En esta dirección el presente ensayo pretende contribuir a la clarificación de los ingredientes de las violencias, a la comprensión de sus interrelaciones pensando más en términos de proceso social y político, que en términos de causas, y al esbozo de patrones de conducta futura, con miras a una solución negociada. He aquí el orden de exposición.

En la primera parte y no obstante la visibilidad y el peso de la violencia política en el momento actual, y del narcoterrorismo en el pasado reciente, se insiste en la irreductibilidad y multiplicidad de expresiones de violencia y de entornos espaciales a partir de los cuales los diferentes actores armados despliegan su potencial bélico, su iniciativa política y sus designios estratégicos. Se subraya allí mismo la creciente urbanización de la violencia, con sus efectos político-militares y culturales en la vida cotidiana de las comunidades barriales que sirven de plataforma a las acciones de las fuerzas encontradas. Todo ello por supuesto sin descartar, sino al contrario enfatizando, las tendencias a la contaminación e involución propias de la atípica prolongación de la guerra irregular en Colombia.

En un segundo momento, se ilustran los patrones de expansión de unas y otras violencias, con su impacto en las formas de sociabilidad y en la frágil esfera pública de la sociedad colombiana, y no obstante la multiplicidad, se introducen criterios de diferenciación entre las acciones provenientes de la insurgencia, con aspiración de poder y de refundación del Estado, y las acciones provenientes de la criminalidad, que apuntan al lucro personal y a la desestructuración del tejido social. Se reconoce asimismo la volatilidad cada vez más notoria de tales fronteras. En efecto, se pueden detectar claramente tendencias a la degradación del conflicto, expresadas por ejemplo en el uso hipertrofiado del secuestro, o de recursos provenientes de la producción y comercio de drogas ilícitas, que no sólo dificultan la dinámica negociadora, sino que dan pretexto a discursos, a apoyos y finalmente a grupos de justicia privada cuya legitimidad es inversa a la de las guerrillas. Es el tema del tercer objeto de reflexión: los paramilitares.

Los paramilitares y grupos de autodefensa, objeto de la tercera parte, se analizan desde su propio discurso y desde sus articulaciones locales y regionales. Punta de lanza en la privatización de la guerra, y factor agravante de la crisis humanitaria que vive Colombia, los paramilitares en su versión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tienen pretensiones de reconocimiento político como *guerrillas del orden*, cuyas acciones más protuberantes son las punitivas que recaen sobre la población civil, dependiendo del arbitrario nivel de adscripción a la insurgencia que le adjudiquen a sus víctimas, procedimiento que dicho sea de paso es propio de todos los actores armados, incluidos los estatales.

La persistencia y aún el agravamiento de las manifestaciones de violencia indican que algo ha andado mal en los casi últimos 20 años de guerra y de negociación. En el cuarto apartado del texto, se indaga por los modelos de negociación y de tránsito de las armas a la política, puestos en práctica por las sucesivas administraciones, desde 1982 hasta hoy. Los límites de concepción, de recursos y de decisión política por parte del Estado, que se superponen a los límites dados por el extrañamiento social y cultural de los excombatientes en vías de reinserción.

El texto cierra con algunas anotaciones en torno a lo que deberían ser los ejes de las acciones futuras en búsqueda de la paz: primero, lo que el asesinado profesor Jesús Antonio Bejarano llamó “ensanchamiento del centro”, es decir de una sociedad civil protagonista; en segundo lugar, la necesidad de “desguerrillarizar” la paz, volviéndola una preocupación de la sociedad en su conjunto y no exclusivamente de la insurgencia y el Estado; en tercer lugar la necesidad de abordar el tema de los campesinos cocaleros no como un problema militar sino como un problema social, que trasciende las actuales zonas de colonización armada y la existencia misma de las guerrillas; y finalmente la necesidad de garantizar la plena vigencia del Derecho Internacional Humanitario.

1. LA SINGULARIDAD DEL CASO COLOMBIANO: MULTIPLICIDAD, INTERDEPENDENCIA Y JERARQUÍA DE VIOLENCIAS

El rasgo característico del espectro político colombiano desde por lo menos la década del ochenta es la *multiplicidad de violencias* en términos de sus orígenes, objetivos, geografía, *modus operandi* y estrategias, en donde lo pragmático y coyuntural parecería tener cada vez más peso en desmedro de los contenidos ideológicos. En los mismos escenarios se pueden encontrar, diferenciados pero también muchas veces entrelazados, el crimen organizado, la lucha guerrillera, la guerra sucia y la violencia social difusa.

Se trata desde luego de una multiplicidad sobredeterminada o atravesada por la economía subterránea y las organizaciones comerciales y criminales del narcotráfico, tanto a nivel interno como en los circuitos internacionales, principalmente americanos (*Cosa Nostra*) e italianos (mafia siciliana y camorra napolitana), que configuran a la postre una peculiar forma de globalización de los mercados y las organizaciones ilegales, con sus estructuras, sus jerarquías, su división del trabajo, sus normas socioculturales y sus articulaciones específicas a los poderes locales (Krauthausen, 1998). Dominio del mercado, protagonismo de la violencia y tendencias a la

fragmentación, tres signos tan característicos del tiempo presente, se anudaron aquí con particular intensidad. A nivel interno asistimos a una verdadera explosión de violencias, con una gran diversidad de expresiones regionales e históricas. Veámos algunos ejemplos: la violencia puede estar asociada con la *lucha por la tierra*, en la cual a menudo las guerrillas operan como protectoras de algunos sectores campesinos contra los terratenientes, los líderes políticos locales, el ejército y las autoridades de policía, en tanto que otros buscan refugio en zonas controladas por los paramilitares, produciéndose así una fragmentación del campesinado difícil de relacionar exclusivamente con la composición de clase del mismo. Esta lucha se ha traducido en un proceso de migraciones masivas y de colonización de zonas de frontera; en una gigantesca contrarreforma agraria realizada por los narcotraficantes; y en una verdadera reconfiguración social y política del país. Se podría hablar incluso de la fundación de un nuevo país sin Estado.

Históricamente tendríamos, pues, dos principales procesos de colonización en el siglo veinte en Colombia. Por un lado, la colonización cafetera antioqueña de la primera mitad del siglo, una gran fuerza transformadora e integradora que creó las bases de un campesinado medio, consolidó los vínculos con el mercado internacional e hizo viable la primera expansión industrial del país. Y, de otro lado, la colonización contemporánea, la cual es permeada por la actividad guerrillera y por los cultivos “ilícitos” y juega en muchos aspectos un papel desestabilizador. Las salidas políticas para el campesinado son hoy por hoy extremadamente limitadas. Peor aún, los campesinos están atrapados hoy entre las redes clientelistas y la insurgencia armada (Uribe, 1993).

La violencia puede estar asociada también en sus orígenes a *disputas territoriales de los actores armados y a condiciones laborales*, es decir, a salarios y condiciones de trabajo. Ejemplo de ello es la agroindustrial zona bananera de Urabá, colindante con Panamá. Allí los principales protagonistas de los enfrentamientos laborales son los terratenientes agrupados en la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) y los empresarios agrícolas, agrupados en la Asociación de Bananeros (Augura), de un lado, y los sindicatos agrícolas, Sintrabanano y Sintagro, de antagónicas influencias políticas y a menudo atravesados por la presión guerrillera, del otro lado. La zona, socialmente construida como región a través de múltiples procesos de colonización, base de operaciones durante décadas de la comercializadora trasnacional United Fruit Company, es hoy de crucial importancia en el mercado de drogas y en el contrabando de armas. Lo mismo podría decirse de las zonas agroindustriales del Magdalena Medio (especialmente el departamento del Cesar). En ambas regiones, Urabá y Magdalena Medio, sindicatos de diferentes afiliaciones han sido forzados desde los años 80 a tomar partido entre las facciones contendientes, es decir, guerrillas del EPL vs FARC, y guerrillas contra paramilitares y el ejército. Las presiones y las acciones violentas las ejercen unos sobre los directivos y administradores de las grandes empresas industriales, creando en consecuencia un ausentismo forzoso de los propietarios y, en el caso específico de la ganadería, un control a distancia de las operaciones productivas; y los otros, ejerciendo sus medidas punitivas sobre los trabajadores de determinadas afiliaciones políticas en las mencionadas empresas, en una cadena de venganzas sin fin por el control de los territorios y de los actores sociales organizados, con catastróficas consecuencias para los trabajadores mismos, víctimas no sólo del capital organizado, sino también de la

hiperpolitización de los discursos y de los procedimientos de la sociedad regional, la sustitución de los actores sociales por los actores políticos, y los proyectos expansivos de los actores armados (2).

La violencia puede estar asociada también a la exacción tributaria en los *centros mineros* estratégicos, tales como el de las esmeraldas, en el occidente del departamento de Boyacá, en donde los grandes patronos han desarrollado un típico poder de carácter mafioso, que no sólo privatiza el uso de la violencia (y la capacidad negociadora) sino que actúa incluso por encima de las tradicionales redes de control, de mediación social, y de favores clientelistas de los partidos políticos (Uribe, 1992); pero también son escenario de violencia las más desprotegidas y menos estudiadas minas de oro en Antioquia; las de carbón en César y Guajira al nordeste del país; y, sobretudo, las petroleras de Santander, Arauca y Casanare, en la frontera venezolana, empujadas buena parte de ellas en zonas de colonización, y convertidas en una de las fuentes de financiación más importante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con el tiempo, estas zonas se han ido convirtiendo en puntos estratégicos de confrontación entre el Estado, las compañías mineras y la guerrilla, a costa de la sociedad. Estado, guerrilla y multinacionales petroleras en muchos casos arreglan sus ganancias, sus pérdidas y sus demostraciones de fuerza a costa de terceros. Inclusive se sospecha que hay multinacionales especulando con la inseguridad en Colombia, es decir que la han convertido en factor de rentabilidad, dando lugar a lo que N. Richani define como **un sistema de autopetrpetuación de la violencia** (Richani, 1997). La guerra en Colombia, en los términos en que se desenvuelve actualmente requiere considerables recursos financieros, que en los hechos se traducen en una triple tributación (a la guerrilla, a los paramilitares, al Estado) y en un desangre cada vez más insostenible del sector productivo.

Tal como lo ilustran estos casos, se trata, pues, en general, de procesos que al contrario de una supuesta correlación automática entre violencia y pobreza, lo que muestran es que la violencia se ha focalizado en las zonas de gran dinamismo y expansión económica: la zona cafetera de antaño (La Violencia de los años 50), y las relativamente prósperas zonas de colonización de hoy. Más que de regiones de escasa movilidad social, la violencia se alimenta predominantemente de las zonas de mayor movilidad, a las cuales fluyen capitales nuevos, migrantes nuevos y nuevas formas de autoridad. Hay quienes aducen que es la velocidad misma de los cambios económicos y sociales de muchas regiones (las petrolíferas Arauca, Casanare y Putumayo, la bananera Urabá...), en desfase evidente con las transformaciones institucionales, lo que explicaría la mayor incidencia de la criminalidad en algunas zonas del país.

Más que su pobreza global, son los desequilibrios internos de esas regiones, la coexistencia irritante de la prosperidad con la pobreza, la sensación de injusticia, los que pueden operar como detonante de la violencia (3). Además, en el caso concreto de las guerrillas, sobre todo en su fase inicial, más allá del papel de las condiciones objetivas, habría condiciones estratégicas sobre la funcionalidad de determinados territorios y

(2) Véase entre otros, Ramírez Tobón, 1997.

(3) Estas relaciones son cuestionadas o reciben diferente presentación en el ensayo de Fernando Gaitán Daza, *in* Deas y Gaitán, 1995.

sectores de la economía nacional. Las guerrillas buscan zonas de refugio, zonas de expansión, zonas de captación de recursos. A menudo compiten por poder y legitimidades con otros actores armados: paramilitares, narcos, autodefensas y las propias fuerzas del Estado (Echandía, 1999: 101 y ss.; Bejarano *et al.*, 1997: 135-136).

Por ello resulta útil interrogarse comparativamente sobre los bajos niveles de violencia en la pobre Bolivia, en contraste con los altos de la próspera Colombia, en las décadas recientes. Y la clave del contraste quizás se encuentre en las diferenciadas experiencias de la acción colectiva. Así:

“el mito positivo, triunfante, de la revolución boliviana de 1952, que es el triunfo de la acción colectiva popular, y el mito negativo de la violencia colombiana de los años cincuenta, con sabor a derrota, que es, por el contrario, la síntesis del fracaso de la acción colectiva pues ella se tradujo en varias derrotas: de los movimientos populares urbanos, del gaitanismo, del movimiento campesino, de la guerrilla liberal, etc... fracaso en fin de la política como construcción colectiva de un orden democrático, de un Estado moderno” (Uprimy).

Confianza boliviana entonces en la acción social y política; asociación negativa de la política con la violencia, suplantación y no representación de los actores sociales por los actores armados, en Colombia.

Este contraste parecería sugerir nuevamente que en Colombia incluso antes que reconstruir el Estado habría que reconstruir la sociedad.

Otro factor que no se puede omitir en el desciframiento de la violencia contemporánea en Colombia es el de la nueva ética del trabajo, tan distinta de la protestante y la católica, que impera en lo social y en la dinámica misma de la guerra. Se trata en efecto de una ética dominada por la ley del menor esfuerzo y el tiempo rápido, en donde la riqueza y la guerra se deben ganar, no importa con qué métodos, y no importa a qué precio.

Sumado a lo anterior, existe desde luego la forma más directa de violencia política: el asesinato político. Es preciso recordar que el partido UP, la Unión Patriótica, una coalición socio-comunista surgida de los primeros acuerdos de paz en 1985 fue diezmada entre 1989 y 1992 lo que, junto con el asesinato del carismático candidato presidencial de la oposición liberal Luis Carlos Galán, y de muchos otros dirigentes guerrilleros que se han lanzado a la arena política (Carlos Toledo Plata, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa, Oscar William Calvo), refuerza los factores inhibitorios frente a cualquier negociación posterior. La ocupación militar de La Uribe, santuario del comando central de las FARC en el departamento del Meta, durante la administración del presidente César Gaviria, hirió el honor de la guerrilla y dio al traste con cualquier posibilidad de vincular al conjunto del movimiento guerrillero a la discusión de la nueva Constitución.

Esta violencia multidimensional por los recursos, por los territorios, por los apoyos sociales y el poder se está convirtiendo, adicionalmente, en la mayor amenaza a las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Más específicamente, ella constituye una amenaza a la sobrevivencia de las *identidades comunitarias* en los departamentos de Chocó y Cauca, y pone en peligro también la estabilidad de los nichos ecológicos de

los cuales dichas comunidades han sido guardianes desde tiempos inmemoriales. La violencia colombiana, en este sentido, está cumpliendo en muchas zonas esparcidas por la geografía nacional un papel similar al de la guerra contemporánea en las tierras mayas de Guatemala, o a la violencia senderista en la región de Ayacucho en el Perú: el papel de máquina de demolición de dichas identidades étnicas y comunitarias (Lebot, 1995; Degregori, 1996). Dolorosa experiencia, pues, la de este país que de vez en cuando descubre al “otro” por la vía del pacto y del derecho, pero que más regularmente se ha ido descubriendo a sí mismo (sus fronteras, sus aborígenes, sus comunidades negras) a través de las rutas de la violencia.

Hasta el momento he caracterizado algunas de las más visibles expresiones de la violencia reciente en Colombia. Quisiera subrayar ahora los **nuevos escenarios geográficos de la misma**, que de alguna forma indican las pautas de las más urgentes transformaciones. En efecto, la violencia está arraigada no sólo en las zonas marginales de colonización sino que ha retornado a las tradicionales regiones de la economía cafetera exportadora que fue antaño el eje de la economía nacional y se encuentra hoy en declinación. En estas regiones, la guerrilla colombiana, que es una guerrilla económicamente pudiente y no como el guatemalteco “Ejército de los Pobres”, puede llegar a veces a pagar a los trabajadores rurales, jornales superiores a los que podría ofrecer cualquier propietario agrícola medio. Fue esto lo que ocurrió durante una huelga cafetera y durante la movilización de colonos en el sur del país, en el departamento del Caquetá, en 1986.

Como dato característico hay que anotar que esta expansión guerrillera es no sólo indiferente al florecimiento de la criminalidad común por fuera de sus propios territorios, sino que no hace mayores esfuerzos de diferenciación con ella, en tanto siga siendo funcional a su crecimiento. Más aún, frecuentemente la subordina a sus propias estrategias, así sea a un costo ético y político que sólo con los años se podrá apreciar (4).

En los últimos diez años se han perfilado modificaciones sustanciales de la geografía del conflicto armado. La violencia ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente rural y ha adoptado múltiples *rostros ciudadanos*. Dada su magnitud y complejidad, este fenómeno merece una reflexión especial.

En primer lugar, tenemos el **impacto del narcoterrorismo**, y del sicariato como brazo armado de una especie de “industria de la muerte” en ciudades como Medellín y

(4) Una guerrilla con visión de futuro debería estar planteándose desde ya los problemas de la reconstrucción, los problemas de la violencia después de la violencia, y para ello asimilar las lecciones de El Salvador y Guatemala, en donde uno de los rasgos más característicos y preocupantes de la situación postbélica es el crecimiento alarmante de la criminalidad común, que ha obstaculizado notablemente el cumplimiento de los acuerdos y puede incluso desestabilizar el proceso de paz. En un coloquio realizado los días 6 y 7 de noviembre de 1997 en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Londres (*Guatemala After the Peace Accords*) al cual tuve la oportunidad de asistir, se señalaba cómo, no obstante la reducción casi a cero de los hechos de violencia política en el primer año de vigencia de los acuerdos, había una escalada de la criminalidad común que los analistas guatemaltecos calificaban de “colombianización” y que estaba obligando a una creciente re-militarización del orden público, en contravía de expresas cláusulas de los pactos de paz. ¿Cómo reconstruir el país, aquí y allá, en medio de una desbordada ola de criminalidad?

Cali, que continúa aún hoy día pese a la liquidación física (Pablo Escobar en 1993, Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mejicano”) o al encarcelamiento de los grandes capos de los carteles, lo que significa que narcos y sicarios gozan de otros apoyos sociales y políticos, de los cuales reciben tareas específicas (Salazar, 1990; Ortiz Sarmiento, 1991; Alape, 1995).

La segunda expresión notable de la violencia urbana, es la que se manifiesta en la implantación de “milicias populares” en comunidades barriales de capitales, como “Ciudad Bolívar” en la propia Bogotá, Distrito de Aguablanca en Cali, Comunas Nororientales de Medellín y en ciudades intermedias como Barrancabermeja. Ligadas a menudo, pero no necesariamente a las guerrillas, operan inicialmente al menos con un mayor nivel de organización y con la complacencia de los habitantes en la eliminación de las otrora incontrolables bandas.

Una tercera modalidad de violencia urbana es la de las operaciones de “limpieza social”, con participación a menudo de policías o ex-policías, contra mendigos, prostitutas y delincuentes callejeros, en Cali, Medellín, Pereira o Barranquilla, para citar sólo los casos más salientes de esta perspectiva neonazi de la miseria y la violencia en los centros urbanos (Stannow, 1996) (5). No faltan los casos en que esas “limpiezas sociales” son realizadas, con el eufemismo de “ajusticiamientos populares”, por parte de grupos o milicias que se proclaman revolucionarias.

No estamos hablando aquí sólo de cambios en la espacialidad de la violencia, o del traspaso de ciertas fronteras simbólicas, como las universidades y las iglesias, lugares sagrados del pensamiento y del culto sacudidos con asesinatos las primeras, y con secuestro colectivo u hostigamientos las segundas, como en el caso de la Iglesia de La María en Calí. Por su parte, los protestantes en territorios de dominio guerrillero están sufriendo procedimientos represivos y de hostigamiento similares a las prácticas despóticas utilizados por las fuerzas policiales en las peores épocas de la Violencia de los 50s. Se trata también de transformaciones en las identidades de los actores o de la emergencia de nuevos actores, cuyas características obligan a hacer algunas anotaciones sobre aspectos culturales de la violencia. Retomemos el caso de los jóvenes sicarios. Se trata a menudo de jóvenes que matan por encargo, que se inician con rituales semisatanicos, que se socializan en el crimen (en bandas, en milicias guerrilleras, en redes de apoyo a narcos, en grupos “justicieros” contra la delincuencia común) y que establecen delimitaciones espaciales (“territorios de miedo”) (6) dentro de las cuales ejercen su

(5) Limpieza del cuerpo; limpieza de la ciudad (“Bogotá limpia”, “Amor por Medellín”); limpieza de la sociedad y deshumanización del conflicto (cosificación de los excluidos, los “desechables”, los “parches” de la ciudad): tres momentos de esta nueva estética social. Sólo a mediados de los 90 se inició una depuración sistemática de los organismos policiales, como lo muestran estas cifras: entre 1995 y 1997 habían sido desvinculados de la institución por diversos motivos 5 044 policías de todos los rangos, 353 oficiales, 517 suboficiales, 647 de otros niveles no especificados, y 3527 agentes. Esto se tradujo en un cambio notorio de la percepción pública sobre la institución. Véase Llorente *in* Deas & Llorente, 1999: 393. Este mismo estudio observa (p. 458) que en la última década ha muerto un promedio de 329 policías por año en actos del servicio, lo que los coloca entre las principales víctimas de la violencia.

(6) Estoy extrapolando aquí el sentido del título del libro, por demás interesante, sobre las formas de producción cultural del miedo de Niño Murcia *et al.*, 1998.

jurisdicción. Asociados inicialmente en base a vínculos primarios de vecindad y parentesco, desde temprano en su vidas estos jóvenes arrastran la carencia-búsqueda de la figura paterna (la ley, la autoridad) y exhiben por el contrario una prolongada dependencia de la figura materna, intercambiable o complementaria, particularmente en Medellín, con la de la Virgen María. Ostensiblemente, ambas figuras femeninas son mitificadas como expresión de tolerancia y de comprensión y hasta se invoca la ayuda de ambas para lograr más eficacia en la acción criminal. Quizás no sin razón, algunos ven en estas formas de violencia expresiones de una transición traumática e inconclusa de una ética religiosa-católica a una ética civil-laica, que de sentido a un nuevo orden político. Por eso éstos son jóvenes que se han quedado sin horizonte, y ya sea en Medellín o en Bogotá, viven la vida al minuto, gozan ansiosamente el instante: la muerte es su única certeza. Asimismo, trasgreden todas las normas de la sociedad, pero exigen eso sí un cumplimiento tiránico de las que rigen sus propias organizaciones, por ejemplo respeto casi sagrado a la palabra empeñada y castigo sin atenuantes a la traición. Su número no encuentra parangón en país alguno del hemisferio occidental. En la sola ciudad de Medellín, entre 1985 y 1990, se estima que operaron al menos 122 bandas, ubicadas no necesariamente en los barrios más pobres. Sus relaciones son muy complejas entre sí: a menudo de cooperación, de rivalidad a veces, de hibridación otras, y en ocasiones de un peculiar reparto del mercado del crimen que le da exclusividad a algunas bandas sobre cierto tipo de delitos (Salazar & Jaramillo, 1992: 89; Jaramillo *et al.*, 1998: 70). El efecto global de esta proliferación ha sido la saturación de los territorios disponibles y un ambiente de desconfianza generalizada.

En el enrolamiento de los jóvenes a estas bandas cuentan no sólo las privaciones materiales sino también y, de manera predominante, motivaciones derivadas de relaciones culturales: la familia, el género, la religión, la escuela, los lazos comunitarios. Al amparo de la intimidación armada, ellos pretenden adquirir los patrones de consumo que con la herencia, la corrupción o la especulación han adquirido otros. No se plantean pues como alternativa a la sociedad de consumo, sino que buscan su abrupta incorporación a ella por el atajo del azar y la violencia.

A ninguna de estas formas de ilegalidad-rebelión han sido ajenas las mujeres. Las bandas constituyen a menudo espacios de socialización de adolescentes maltratadas o abandonadas en su temprana infancia, en busca de reconocimiento y de lazos afectivos rotos. Para aquellas jóvenes mujeres que ingresan a la insurgencia, especialmente cuando se trata de la "milicias", la banda puede ser el lugar de los altruismos y de los sueños redentores, pero también el lugar para la descomposición y la lumpenización. Las privaciones acumuladas durante años se pretenden resolver en un día y quizás a costa de la vida de cualquier desafortunado. El ingreso a las «milicias» puede ser asimismo la ocasión para romper con ataduras sociales y formas de sumisión que se han perpetuado en la vida cotidiana, pero, y aún sin proponérselo, la banda puede ser también el lugar para la autodestrucción (Salazar, 1998).

Desde otro punto de vista, con estas nuevas formas de sociabilidad irregular se han visto afectados muchos de los referentes de nuestra memoria, del manejo de nuestro tiempo. Así, mientras la guerrilla se precia de moverse con ritmos mucho más largos que

los de los gobiernos, con un tiempo bíblico se dice, otros actores de violencia se mueven en la dirección opuesta, por ejemplo los sicarios:

“el sicario ha incorporado el sentido efímero del tiempo propio de nuestra época. La vida es el instante. Ni el pasado ni el futuro existen. El sicario lleva la sociedad de consumo al extremo: convierte la vida, la propia vida y la de las víctimas, en objetos de transacción económica, en objetos desechables. En contrapartida ha incorporado la muerte como elemento cotidiano. Es normal matar y morir” (Salazar, 1990: 200).

Desacralización de la muerte, banalización de la vida. Sobre estas visiones trastocadas de la vida y de la muerte versan precisamente dos sobrecogedoras novelas recientes: *La Virgen de los Sicarios*, de Fernando Vallejo, y *Rosario Tijeras*, de Jorge Franco Ramos. Allí la vida aparece como despreciable y sin sentido: es el dominio de la fatalidad. La muerte en cambio, no es como en el cristianismo tradicional, paso a otra vida, sino que en sí misma reviste el carácter de fuerza sanadora, reparadora y hasta gratificadora. Ella puede ser imaginada como un bien deseable que permite huirle a esta vida inútil, llena de privaciones e injusticias. Hay en los jóvenes sicarios una perversa fascinación con la muerte, una lúdica de la muerte: para soportarla, para ejecutarla, para narrarla.

Con la violencia cotidiana, el tiempo de los vivos se ha vuelto el tiempo de los muertos. Los calendarios, personales y políticos, se han llenado de cruces. Pero a diferencia del Cono Sur en donde el olvido y la memoria de la violencia fueron teatralizados y exorcizados en el gran Proceso, en el **Nunca Más** (Taylor, 1993), en Colombia, por el contrario, la violencia, la masacre, tienden a ser rutinizadas y reubicadas incesantemente en una especie de frontera entre la memoria y la no-memoria. El miedo, el dolor, el trauma, la memoria, son algunos de los tantos temas sobre los cuales la investigación colombiana se va volcando con urgencia.

Es cierto, durante años el país mismo en su conjunto no dejó de sorprenderse con esta paradoja: en ese mar de violencias y de tribulaciones descrito, Colombia había sido el país de la más alta tasa de crecimiento medio (3,7 %) en América Latina desde 1980. Confortable estadística para los hombres de negocios, que permitía suponer una cierta autonomía entre economía y política, y que se desvaneció dramáticamente a partir de 1998. Desde entonces, con la economía en crisis, los analistas empezaron a pensar más en los impactos negativos de la violencia, representados por ejemplo, en el hurto de ganado; en destrucción de modestas habitaciones particulares y de edificios públicos en los poblados; en el sabotaje de carreteras; en incendio de vehículos y de mercancías; en riesgos de secuestros colectivos en las principales vías, conocidos como “pescas milagrosas” (forma modernizada de los antiguos salteadores de caminos); en la medición de recursos destinados a la seguridad; en las diversas expresiones de desaliento a las inversiones y al turismo; en perturbaciones de diverso orden a las actividades productivas; en la teoría económica del crimen (Reina, 1996; Bejarano *et al.*, 1997).

Raza, economía y vida cotidiana también son atravesadas por la violencia.

La *primera gran conclusión* sería que en un contexto latinoamericano o más amplio, lo que es notable en Colombia es la *extraordinaria diversidad de violencias*,

acompañadas de aberrantes índices de impunidad, que se convierten a su turno en factores coadyuvantes de la reproducción y expansión de la criminalidad, y más recientemente de una visible inestabilidad del orden social y político vigente, que no desembocará necesariamente en un proceso revolucionario en los términos clásicos, a juzgar por las plataformas de los diferentes actores armados.

Este fue en términos generales el panorama presentado por un grupo de intelectuales hace más de diez años en su *Informe al Presidente Barco* (7). Aunque el *Informe* tuvo una amplia recepción en los círculos académicos y gubernamentales, y la idea de múltiples e interconectadas violencias ganó significativa audiencia, se le hicieron tres reparos fundamentales: primero, que el informe atentaba contra una visión *holística* de la violencia, y más aún, que reforzaba una visión fragmentada del fenómeno. Segundo, que en su esfuerzo por destacar la variedad de violencias, el *sistema de violencias*, los autores a su pesar contribuyeron a minimizar las dimensiones políticas del fenómeno. En tercer lugar, el estudio de los “violentólogos” —se dice— ha tenido un impacto negativo en las políticas oficiales de paz al sobredimensionar el peso de las “causas objetivas” de la violencia y crear de hecho un discurso legitimador de la rebeldía política (8). Retomaremos algunos de estos puntos más adelante.

2. UNA PREMISA METODOLÓGICA Y ESTRATÉGICA: FORMAS NEGOCIABLES Y NO NEGOCIABLES DE VIOLENCIA

Otras partes del análisis causaron menos controversia en su momento pero han reanimado el debate recientemente. Entre estas últimas estaba la distinción crucial entre violencia política y no política, y más significativamente aún, que tanto ha sorprendido a los analistas del conflicto peruano y centroamericano contemporáneo. La idea era establecer una clara línea de demarcación, con propósitos académicos pero sobretudo político-prácticos, entre la violencia circunscrita a la confrontación guerrilla-Estado, y otras expresiones de violencia que apuntaban a la seguridad pública (la seguridad, no del Estado, sino de los ciudadanos en cuanto tales) y a las conductas sociales.

Sobre la primera modalidad, la violencia negociable, asociada a la rebelión y a la protesta, Colombia tiene una larga tradición y hasta rutinización de su manejo: los armisticios de las guerras civiles del siglo XIX; las amnistías y el Frente Nacional luego del período de La Violencia; los más recientes armisticios con los antiguos guerrilleros en los 90s, y hasta la propia Constitución de 1991 en lo que tiene de pacto entre el gobierno y un importante sector del movimiento guerrillero, el popular-nacionalista M19, y el Quintín Lame, que tomó su nombre del más prestigioso líder indígena del siglo XX en Colombia.

Sobre el segundo tipo de modalidades de violencia —las *no-negociables*—, el criterio de la Comisión creada por el gobierno en 1987 fue resaltar las nuevas

(7) Comisión de Estudios sobre la Violencia, 1995. El autor del presente ensayo fue el Coordinador de dicha Comisión, integrada por 9 académicos y un General (r) del Ejército.

(8) El trabajo más sofisticado en esta última perspectiva y un verdadero manifiesto contra la impunidad es el de Mauricio Rubio (1999). Para una crítica severa de este trabajo, véase Gutiérrez (1999).

expresiones que habían sido ignoradas por las agencias gubernamentales y por los científicos sociales. Con todo, es preciso subrayar que las fronteras entre lo negociable y lo no negociable son muy inestables: el narcotráfico fue considerado hace unos años, antes de la presión norteamericana, negociable; y la criminalidad asociada con las milicias urbanas, que era considerada como no negociable, se resolvió parcialmente a través de negociaciones. Muchas bandas de Medellín se convirtieron en organizaciones políticas y fueron tratadas como tales por las autoridades municipales y departamentales, con la aprobación del gobierno central. En realidad, una de las peculiaridades de la sociedad contemporánea colombiana es la fluidez entre lo voluntario y lo coercitivo, lo legal y lo ilegal, lo institucional y lo parainstitucional, lo revolucionario y lo criminal, a tal punto que muchas veces no sólo hay indefinición de fronteras sino de hecho involución política.

En todo caso, el incremento de la criminalidad se refleja de manera contundente en las cifras de homicidios. Colombia tenía, en el tránsito de una a otra década (1989-1992), una tasa de homicidios intencionales de alrededor 77,5 por 100 mil habitantes (el tope fue 86 en 1991). Significativamente los más afectados por estas altísimas tasas de mortalidad son los jóvenes, de sexo masculino, entre 15-24 años de edad. En términos de impacto diferenciado de género señalemos que en 1994 el grupo masculino de 20 a 24 años alcanzó una tasa de 142,5 por 100 mil habitantes, en tanto que su equivalente femenino sólo llegó a 9,3. En términos de distribución regional, vale también la pena destacar que las tasas más altas se registran en los departamentos de Antioquia, Caldas y Valle, es decir, en los grandes polos de desarrollo económico del país, que junto con la capital, Bogotá (cuya tasa es la del promedio nacional), contabilizaban, a mediados de los 90s, cerca del 70% del total de homicidios del país (9). El homicidio se había convertido en la principal causa de muerte en Medellín desde 1985, con una tasa de 100,8 muertes violentas por 100 mil habitantes, de lejos la más alta del país entonces (Salazar & Jaramillo, 1992: 80). Y aunque a fines de los 90 el porcentaje de homicidios en el conjunto nacional decreció (72 en 1995 y 56 en 1998), es todavía, en términos comparativos, y excluyendo los países en guerra, uno de los más altos del mundo en la actualidad:

Francia	4,6
USA	8,0
Perú	11,5
México	20
Brazil	24,6
Colombia	72

Durante los últimos cinco años la composición de la criminalidad probablemente esté cambiando: menos homicidios, más secuestros, por ejemplo. Pero, de todas

(9) Para éstas y otras cifras, véase Franco, 1999: 82 y ss. En ciertos momentos y regiones las cifras son verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, según este mismo estudio, en Antioquia, en 1994, se registró una tasa de 1 044 homicidios por 100 000 habitantes en el grupo masculino de 20-24 años, es decir, que en ese año uno de cada cien antioqueños de esa edad fue asesinado. Al comparar el total de defunciones en el país con el total de homicidios, Franco concluye que “más de la mitad de los adolescentes hombres que murieron en 1994 en el país fueron víctimas de homicidios” (p. 93).

maneras, en términos de Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, la criminalidad colombiana fue tres veces mayor que la de Brasil, el segundo país más violento de América Latina; y durante el curso de un año el número de homicidios en Colombia fue casi tres veces más alto que el de la República China.

Cifras de Homicidios, entre 1982-1998.

Año	Total de homicidios	Homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales
1982	10,580	525
1983	9,721	524
1984	10,694	542
1985	12,899	630
1986	15,672	1,387
1987	17,419	1,651
1988	21,100	2,738
1989	23,312	1,978
1990	24,267	2,007
1991	28,140	1,828
1992	28,224	2,178
1993	28,026	2,190
1994	26,807	1,668
1995	25,398	1,031
1996	26,642	—
1997	23,379	—
1998	23,096	—

Fuente: Comisión Colombiana de Juristas, 1996; Policía Nacional, 1998; Franco, 1999.

Si se considera el promedio de homicidios intencionales entre 1986 y 1995, que fue de aproximadamente 24 000, y hacemos la proyección para la década, tendríamos una cifra perfectamente cotejable con la de la década sanguinaria de la violencia de los años 50, que hace unos pocos años habríamos pensado como irrepetible.

La violencia es, por otra parte, el mayor problema de salud pública hoy en Colombia, con una participación del 26% en la carga financiera del sistema de salud, que contrasta palmariamente con un 3,3% para América Latina y un 1,5% para el resto del mundo (Rubio, 1999: 175).

Pero hay algo aún más preocupante: es el crecimiento simultáneo de criminalidad e impunidad. El fenómeno de la impunidad no es nuevo pero las dimensiones sí. Desde la Segunda Guerra Mundial, en efecto, el sistema judicial colombiano no sólo incrementó anualmente su ineficiencia, en términos del volumen de casos no decididos, sino que además careció de criterios para darle la prioridad necesaria a las investigaciones por los delitos socialmente más graves, los delitos contra la vida y la integridad personal. Hacia 1990 casi la mitad de los procesos judiciales terminaron en la impunidad con un simple pronunciamiento técnico: el de la prescripción. Por otro lado, el crecimiento paralelo (¿interrelacionado?) entre la tasa de homicidios y el crimen organizado en las últimas

décadas ha reducido al mínimo los riesgos penales de los delincuentes (sólo un 6% de los homicidios cometidos son judicializados y los penalizados no sobrepasan el 4%, para no mencionar los que simplemente no se denuncian, la llamada “criminalidad oculta”) lo que equivale de hecho a un verdadero colapso, a una deserción del sistema judicial. Hay incluso una relación inversa entre las formas más graves de criminalidad y la acción judicial: “a más homicidios, menos asesinos detenidos” (Franco, 1999: 11; Rubio, 1999). A todas estas expresiones de la crisis de la justicia debe sumarse la crisis del sistema carcelario colombiano, que se expresa en hacinamiento, en corrupción y en violencia interna que hace de las prisiones no centros de rehabilitación sino una verdadera “Universidad del Mal”. La violencia es asunto de ley, de justicia y de autoridad, de autoridad con legitimidad.

Como consecuencia de las múltiples violencias, todos los escenarios de la vida cotidiana en Colombia sufrieron profundas alteraciones: las formas de sociabilidad (fiestas, comidas nocturnas en restaurantes, etcétera, se han reducido enormemente); las actividades de esparcimiento para los niños en la calle y en los parques se han limitado (por el temor al secuestro); las maneras de vestir especialmente para las mujeres se han vuelto particularmente austeras (no pueden portar collares, aretes, pulseras y joyas en general); las casas se han ido convirtiendo en verdaderas prisiones, cercadas y enrejadas; se han incrementado las construcciones de conjuntos habitacionales cerrados, considerados con razón como una especie de *apartheid espacial* (10), con barreras infranqueables para los “*indeseables*”; en barrios de muchas ciudades las calles, especialmente para los jóvenes, “están sembradas de muerte” (Salazar, 1990: 180) y son escenarios de socialización para el delito; hay alto riesgo en caminar por la calle o parar un taxi en la noche. En una palabra, todas las prácticas colectivas se han visto afectadas de una u otra forma por las diferentes expresiones de la violencia.

Como resultado de estas tendencias, se ha producido una ostensible contracción de lo público, convertido ahora en el territorio del miedo y de la fuerza, y una exaltación de la esfera privada. Como corolario, el interés ciudadano se fue sacrificando en aras del movimiento defensivo del interés privado (Camacho & Guzmán, 1996). Para ponerlo en términos fuertes, las calles de las ciudades, como diría Yi-fu Tuan (1979), se han ido convirtiendo en “paisajes de miedo”, *landscapes of fear*: miedo a los terroristas, miedo a los ladrones, miedo también al vecino, al transeúnte, a los organismos de seguridad, a los mendigos, miedo incluso a las propias víctimas de la violencia tendidas en la acera esperando en vano un gesto solidario. Este ambiente ha dado lugar a una verdadera explosión de guardias privados—que vigilan residencias, edificios públicos e instituciones bancarias—, y en casos extremos a bandas de autodefensa comunitaria. La ciudad se ha vuelto un mundo de habitantes incomunicados.

No sólo el miedo se ha vuelto una experiencia colectiva, también el dolor bajo esa modalidad que se expresa con motivo de la partida de los seres queridos y que llamamos el duelo: ¿a cuántos entierros de parientes, coterráneos, compañeros de colegio, colegas o copartidarios, originados en la violencia, ha ido cada colombiano en los últimos diez años? Y ¿cuántas veces también en la experiencia íntima a raíz de estos

(10) La expresión es de Diego Pérez Guzmán & Marco Raúl Mejía, 1996: 171.

episodios abrumadores se ha pasado del duelo de la marcha fúnebre, a la rabia, y luego a la impotencia?

Dadas las dimensiones de esta experiencia colectiva de violencia no se puede esperar que la paz sea el logro inmediato de un proceso negociador. La situación es de hecho tan compleja que en Colombia, así se negociara la reconstrucción institucional con la guerrilla mañana, la reconstrucción del Estado y del tejido social podría tomar décadas. Pasar, en efecto, del hobbesianismo actual a lo que, en otro contexto, se ha llamado un estado de “reciprocidad generalizada” (Putman, 1993) en donde cada cual puede asumir que todos los demás se están sometiendo a las mismas reglas, implicará un largo proceso de aprendizaje y de reinención de tradiciones cívicas que la reproducción de las violencias ha ido aniquilando. En este sentido, más que de superar una crisis política o una crisis del Estado, se trataría de una crisis de sociedad, que está por reconstruir o refundar: en sus valores, en sus solidaridades y en sus conductas anteriores a todo orden político. Porque se trata en efecto de una sociedad que por efecto combinado de violencia y narcotráfico ha visto transformadas las estructuras de la comercialización; los fundamentos de la acumulación (la ilegalidad sustituyendo la ganancia socialmente aceptada); los valores culturales; las redes entre el dinero, la justicia y la política; las maneras de relacionarse con la vida y con la muerte. Es una sociedad que más allá de la posibilidad de formular cualquier proyecto de unidad o de orden nacional, está sometida a un permanente proceso de «negociación del desorden» que lo haga, si no erradicable, al menos soportable (11). Claro que una sociedad así para mantenerse en pie tiene que desarrollar también estrategias y formas inéditas de resistencia cultural, pero este es un tema que desborda los objetivos de este ensayo.

El punto entonces es que la situación presentada en el diagnóstico de los “violentólogos” hace más de diez años, ha empeorado y cambiado sus patrones de desarrollo: la violencia política lejos de ser una forma marginal de violencia entre otras es reconocida como el contexto de reproducción de todas las otras formas de violencia, o para decirlo de otra manera “la violencia organizada constituye el contexto de la violencia no organizada” (Pécaut, 1997: 3), que no sólo favorece la expansión de las otras formas de violencia sino que ella misma se ve afectada y sobre todo contaminada por ellas.

Detallemos algunos indicadores del agravamiento de la situación. Primero, la ecuación militar: si hace una década las guerrillas estaban ubicadas principalmente en las zonas periféricas, las regiones de la colonización moderna, este ya no es el caso. Las guerrillas de hoy están presentes no sólo en cerca del 93% de los *municipios* de ocupación reciente, sino también en por lo menos la mitad de todos los municipios del país (12). Aunque a menudo estas cifras no distinguen apropiadamente la presencia permanente u ocasional, son de todas maneras indicativas de las dimensiones del fenómeno y sobre todo del grado de penetración en los poros de la sociedad, como nunca en épocas anteriores, ratificando las prevenciones de quienes desde las posiciones más recalcitrantes sostenían que la tregua y las negociaciones de mediados de los 80s habían

(11) Tomo prestada y pongo fuera de su contexto esta fórmula de Uribe (Varios Autores, 1977: 168).

(12) Cifras elaboradas por Camilo Echandía y reproducidas en el diario *El Tiempo*, 9/7/1995.

sido un episodio más de la vieja táctica comunista de la “combinación de todas las formas de lucha” para obtener ventajas en el terreno militar, como es hasta cierto punto natural en las fases iniciales de todo proceso de negociación. En todo caso, con la liquidación de la Unión Patriótica y los centenares de asesinatos políticos posteriores, esa táctica de tener simultáneamente un frente en la política abierta y otro en la clandestinidad quedó agotada y por consiguiente la transición de la guerra a la política en futuros procesos de negociación tendrá que recorrer caminos inéditos.

Según cifras de 1995, que revelan una tendencia no contrarrestada hasta ahora, las guerrillas pasaron de 7 673 hombres, y 80 Frentes, en 1991, a 10 483 hombres y 105 Frentes en 1994, y en muchas regiones “las guerrillas constituyen una forma semi-clandestina y semi-pública de gobierno local” (Braun, 1994: 24). Y ese crecimiento ha continuado de manera exponencial hasta hoy, elevando también inusitadamente las operaciones tendientes a sostener financieramente semejante ejército irregular (secuestro, extorsión, participación en el negocio de las drogas y apropiación de recursos públicos). Se ha podido establecer, en efecto, que entre 1991 y 1994, los ingresos de las FARC y el ELN, por concepto de los anteriores rubros crecieron un 87%, sin que aún se vea muy claro hasta dónde puede llegar el umbral de tolerancia social con estas prácticas (Bejarano *et al.*, 1997: 35). El pago de tributos más o menos permanentes por parte de los sectores pudientes y de las multinacionales a los actores armados se ha vuelto una forma de convivencia negociada con la violencia, que tiende a reproducirse, y que incluso puede ir en contravía de los esfuerzos estatales para eliminarla. Su capacidad operativa les ha permitido incluso ejercer lo que se ha llamado una “veeduría armada” (Vargas M., 1999: 47) sobre los alcaldes y sobre los presupuestos locales y regionales.

Henry Kissinger, en un texto pertinente, ha puesto en evidencia la asimetría en la dinámica de los contendores armados. Así: “la guerrilla gana si no pierde, el ejército convencional pierde si no gana” (Kissinger *in* Zartman, 1995: 9). Con las cifras antes señaladas es fácil adivinar el aire triunfante de la guerrilla colombiana y la sensación de fracaso, desmoralización y decepción del ejército. Según uno de los más prestigiosos generales retirados, el general Valencia Tovar, quien tuvo a su cargo las operaciones militares en las que pereció el cura revolucionario Camilo Torres (1966), el *establishment* colombiano empezó a perder hace más de 30 años, en 1964, por dos razones: primero, una *razón militar*, el ejército fue incapaz de entender la naturaleza de las nacientes guerrillas de los 60s, al asociarlas con el bandolerismo, o en todo caso, con las secuelas de las viejas rivalidades partidistas. Segundo, una *razón política*, la inconsistencia de las políticas estatales para realizar las tareas de rehabilitación económica y social de las áreas afectadas por la vieja violencia, que impidieran el renacer de la lucha armada (*El Tiempo*, 13/9/1996). Es decir, la no resolución de la vieja violencia, nos metió, casi sin que lo advirtiéramos, en la actual. Y sólo ahora, terminada la Guerra Fría, se hace posible no sólo para los militares sino para las élites en general, indagarse sobre las causas endógenas de esa violencia.

Un segundo signo del deterioro actual es el *desplazamiento interno*. El número de desplazados (y de refugiados a países vecinos, Venezuela, Ecuador, Panamá) está adquiriendo proporciones abrumadoras: durante los últimos años la cifra se aproxima al millón y medio de desplazados. Estas cifras significan que en la actualidad uno de cada 40 colombianos huye de su región por razones de violencia. Sólo en el año de 1998 el

número de desplazados ascendió a 308 000. La región de Urabá, el sur del departamento de Bolívar y el Magdalena Medio, áreas de confrontación entre guerrillas y grupos paramilitares, son las más afectadas por el desarraigo forzoso de sus gentes, que con el territorio y los recursos pierden muchos otros referentes culturales. Y sólo hasta ahora comienza a hablarse de ello en la prensa internacional, a pesar de que se trata de cifras superadas sólo por Sudan, Afganistán y Angola. Incluso en Centroamérica llamaron mucho más la atención las migraciones y los exilios, quizás por el hecho de que se concentraron especialmente en un solo país, siendo éste precisamente los Estados Unidos, a diferencia del desplazamiento muy disperso de Colombia a los países vecinos.

Un tercer signo es lo que podríamos llamar la involución política, uno de los más preocupantes efectos de la expansión económica militar y geográfica de las guerrillas en la última década. Tal involución política es consecuencia, entre otras cosas, de las alianzas operativas o tácticas con el narcotráfico en algunas zonas, con grandes beneficios económicos inmediatos, ciertamente, pero con incalculables costos éticos. De una violencia con claros objetivos políticos, con horizontes ético-normativos definidos y con criterios de acción regulados o autorregulados, se ha ido pasando a una creciente indiferenciación de fronteras con la criminalidad común. Estoy pensando sobre todo en el secuestro por razones económicas, que se expandió de manera dramática, especialmente después del colapso del bloque socialista, que fue durante largo tiempo el proveedor de recursos y de armas a las guerrillas del resto del mundo, incluida Colombia.

Colombia tiene hoy el más elevado número de secuestros en el mundo (50% del total) y más de la tercera parte de ellos realizados por las guerrillas. El número total de secuestros entre 1995 y 1998 se incrementó en más del doble: en 1995 fue de 1 158 secuestros; en 1996 fue de 1 608 secuestros; en 1997 ascendió a 1 986 secuestros y en 1998 alcanzó la cifra de 2 609 (Policía Nacional, 1999: 55), sin contar por supuesto el bajísimo grado de denuncia, estimado en un 20%, pues los parientes de las víctimas prefieren negociar silenciosamente. A la luz de estas cifras se puede decir que Colombia es hoy una sociedad asediada.

Un antiguo representante del gremio de los ganaderos ha señalado que “ser secuestrado en Colombia ya no es un riesgo, es una gran posibilidad” (Varios autores, 1994: 19) (13). Entre 1987 y 1998 el número total fue de 15 181 secuestros. El secuestro, con otras formas de exacción generalizadas, como el “boleteo” y la “vacuna” (cotización ocasional o “economía tributaria” de la insurgencia), es un sistema de transferencia de recursos, principal, pero no exclusivamente del sector agrario a los grupos armados. Adviértase que el sector agrario sufre, además de las mencionadas manifestaciones de violencia, como el robo o exterminio físico de ganado de los hatos, el incendio y destrucción de instalaciones de las fincas, y de otras que deben sumarse a los crecientes costos de la guerra en Colombia. Si se tienen en cuenta las motivaciones del secuestrador, las relaciones entre secuestro, dinero y política, resulta extremadamente compleja. Todas las combinaciones son posibles (14). En su texto, *Noticia de un Secuestro* (1996),

(13) En este texto se afirma que cada cinco horas es secuestrada una persona en Colombia.

(14) Véase por ejemplo Turner, 1998. La ley colombiana contempla tres modalidades de secuestro: político, extorsivo y terrorista.

Gabriel García Márquez ha mostrado hasta dónde la retención de un selecto número de personalidades de la política colombiana, realizada por Pablo Escobar y los Extraditables, activaba todas las redes de poder y de solidaridad entre las élites, y podía operar también como mecanismo de presión eficaz para inducir cambios en el sistema legal y judicial del país, e incluso en la formulación de cláusulas específicas de la nueva *Constitución Nacional* expedida en 1991 (Varios autores, 1994: 48). Muchos de los secuestros de las guerrillas se orientan también a modificar decisiones del ejecutivo, del legislativo y en general de los poderes públicos; a presionar la liberación de prisioneros políticos; a imponer determinado curso a las negociaciones; hasta llegar al desplante de la oficialización nacional e internacional de la extorsión colectiva (con amenaza de secuestro) mediante la llamada “Ley 002 sobre tributación” del Estado Mayor de las FARC, promulgada en marzo del 2000, para los patrimonios superiores a un millón de dólares. Este punto desborda los objetivos de este ensayo.

Lo que queremos subrayar más bien es que el análisis no se puede limitar sólo a las dimensiones políticas y económicas del secuestro, y en especial al “rescate”, que es lo que en la mayoría de los casos interesa esencialmente a los plagiarios. Los medios no pueden ser indiferentes a los pretendidos objetivos políticos. En el secuestro están envueltos en verdad muchos aspectos de un drama humanitario que se inicia a menudo con los riesgos de la operación misma, en que la víctima es arrancada del entorno natural, profesional y familiar. Por ello, entre otras cosas, desde los primeros momentos y hasta el desenlace del secuestro, para los parientes y negociadores se vuelven esenciales las rituales “pruebas de supervivencia”, que son al mismo tiempo de identidad de los captores. Todas las expectativas del secuestrado y sus parientes oscilarán entre la ejecución, la liberación voluntaria, la fuga y el rescate armado.

Lo inesperado del hecho y la simple incertidumbre de en manos de quién se está (delincuencia común, narcotraficantes, guerrilleros), constituye suficiente motivo de desconcierto y angustia tanto para la víctima como para su familia que gradualmente descubrirán que hay una secuencia, unas reglas y unas etapas más o menos definidas, en el *modus operandi* del secuestro, incluso unos tiempos muertos en el proceso de negociación. Y si se trata de la insurgencia, el hecho mismo de reconocer el secuestro tiene ventajas: obliga a los victimarios a comportarse mínimamente como actores políticos. Con todo, importa determinar también de qué grupo específico proviene la autoría, pues la reputación de barbarie con sus víctimas se reparte desigualmente entre ellos, aunque a menudo esto tampoco importa demasiado pues la delincuencia común suele “vender” sus secuestrados a la insurgencia, y el anonimato de la operación le permite a la guerrilla eludir las responsabilidades políticas de la operación. *El secuestro es la dimensión antiheroica de la guerrilla.*

El calvario para la víctima se prolonga con su traslado en vehículos, vendada los ojos, o tras agotadoras jornadas a pie, a un sitio no identificable, a un no-lugar, cuyos contornos no debe reconocer, sometida a un tormento adicional: el de la soledad. Allí estará bajo el control físico y mental de sus verdugos, con los cuales la mayoría de las veces la interlocución se limitará a los insultos, a la indagación por los bienes, a la perpetua amenaza de las armas y la muerte y adicionalmente en el caso de las mujeres, a la amenaza de la violación sexual y a la dignidad pisoteada en el ejercicio de los actos más íntimos como bañarse y hacer sus necesidades fisiológicas, bajo vigilancia o atada

a una cuerda. Para algunos una de las ansiedades más frecuentes es la de perecer en el cautiverio sin que nadie se entere del hecho, “sin que haya una tumba a dónde ir a visitarlo” (Varios autores, 1994: 98). En ese escenario la víctima es sometida a un proceso de cosificación, de simple “mercancía” negociable, rodeada por una estructura organizativa que, al igual que la de los torturadores de las dictaduras, tiene sus especialistas en la presión física y psicológica, en la extracción de información, y en la gradación del suplicio para mantener la “utilidad” monetaria de la víctima y la eventual cooperación-sumisión de la familia. El secuestrado se encuentra allí no sólo en una extrema soledad —a la espera de una transacción de la cual dependen su vida y su libertad— sino además rodeado de barreras y controles que eviten todo contacto o muestra de simpatía emocional con sus vigilantes. A veces para desconcertarlo hasta se le quita la posibilidad de registrar las horas, los días, los meses, el control del tiempo. Es el intento de despojo de la memoria, que tanto obsesiona también a los presidiarios. El secuestro constituye el símbolo por excelencia de la paradoja guerrillera, que se reclama portadora de un proyecto emancipador (contra la alienación) y que al mismo tiempo reduce el cuerpo de sus víctimas a una envilecida mercancía capitalista.

Es apenas comprensible que tal experiencia traumática exacerbe los sentimientos religiosos tanto del cautivo como de sus familiares. Es frecuente en estos últimos el recurso a videntes, a astrólogos, a espiritistas. La religiosidad les brinda la única seguridad imaginaria, pues de hecho es la desconfianza (de los alimentos, de las noticias, de las personas) la que gobierna las relaciones de los secuestradores entre sí y de éstos con su víctima.

Los familiares por su parte no sólo se sienten culpables del secuestro sino que restringen muchas satisfacciones de la vida cotidiana para no ofender al cautivo. Como ha subrayado una psicóloga que ha atendido profesionalmente a numerosos secuestrados, los familiares “viven una experiencia devastadora. En cierta forma, ellos también están secuestrados. No pueden salir de su casa porque esperan una llamada, tienen miedo de que los vigilen o se los lleven para canjearlos. Sienten amenazada su integridad personal. Es tan fuerte la tensión, que toda la familia entra en un estado de crisis. Cada miembro, de acuerdo con sus características, reacciona ante la situación. Por eso, los conflictos previos se multiplican, se hacen más intensos y afectan la unión familiar” (Varios autores, 1994: 316). (15)

Tras la liberación, negociada o por acción de las autoridades, la memoria del cautiverio queda por lo general como una experiencia suprimida, y comenzará para la víctima el arduo trabajo de reconstruir familia, reconstruir afectos, reconstruir confianza. Con razón se ha definido esta aberrante práctica del secuestro como “*una muerte suspendida*” (Meluk, 1998).

Consumado el secuestro vendrán *a posteriori* para los captores las elaboraciones de las justificaciones y el reparto, a menudo conflictivo, del botín. Pero estos son temas que desbordan los objetivos de este ensayo.

Colombia es de seguro el único país en el mundo en donde existe una ONG especializada en la lucha contra el secuestro, *País Libre*. En años recientes ha habido masivas demostraciones contra este flagelo y clamores recurrentes por el restablecimiento

(15) Relato de la psicóloga Cecilia Gerlein.

de la *pena de muerte* para enfrentarlo, y por su exclusión del listado de los delitos políticos y por tanto de los susceptibles de amnistías e indultos. El confesado secuestro y posterior asesinato por parte de las FARC de tres ambientalistas norteamericanos a comienzos de 1999, enturbió las relaciones de la insurgencia con las ONGs de Europa y Estados Unidos y debilitó a los sectores gubernamentales americanos más claramente interesados en apoyar el proceso de paz. Más importante aún, el crecimiento desbordado del secuestro ha sido una de las principales justificaciones de la expansión de los grupos paramilitares, a los cuales recurren preventiva o punitivamente las potenciales o reales víctimas. Tales grupos cuentan hoy con creciente respaldo de las comunidades locales, como aconteció en Guatemala con las “patrullas cívicas” y en Perú con las Rondas Campesinas.

Otra derivación de la involución-degradación del conflicto es la *circularidad entre los diversos actores* de la violencia: guerrilleros o ex-guerrilleros que se vuelven paramilitares (en las filas del movimiento de Autodefensas de Carlos Castaño no sólo hay numerosos excombatientes del EPL y del ELN, sino lo que es más grave, desertores del Ejército regular con rango de oficiales); la insurgencia brindándole entrenamiento militar en sus campamentos a bandas juveniles de delincuencia común en Medellín al amparo de los acuerdos del proceso de paz de la administración del presidente Betancur (Salazar, 1990: 86-87); narcotraficantes y delincuencia organizada que se ponen al servicio de la insurgencia; cambios en identidades para encubrir, o para atribuir a otros, operaciones que generan el repudio público (en especial el secuestro) y, como se ha detectado en Medellín, borrosos y complejos límites entre las milicias urbanas, las multifacéticas bandas juveniles, y las del sicariato asociado al narcotráfico. Si de las guerrillas de los 50s se ha podido decir que se movían hacia la cualificación, de las de hoy, pese a los numerosos códigos guerrilleros (16), habría que decir que se mueven, en muchos aspectos, hacia la degradación (17) o involución.

3. UN NUEVO MODELO DE CONTRAINSURGENCIA: LA PRIVATIZACIÓN DE LA GUERRA

Los Grupos de Autodefensa tal como existen hoy en Colombia tuvieron su Primera Conferencial Regional en 1994. Tres años más tarde en junio de 1997, celebraron la Primera Conferencia Nacional y, siguiendo casi los mismos esquemas de las guerrillas, establecieron una estrategia política y militar para derrotar a las fuerzas subversivas. Tienen hoy sus propios Comandos, una emisora, un órgano de difusión propia, *Colombia Libre*, uniformes, emblemas, y un módulo para aplicar: “Puerto

(16) El historiador Mario Aguilera adelanta una novedosa investigación sobre la “justicia insurgente”.

(17) Esta es una de las tesis centrales de mi libro (1991). Es en parte también la trayectoria de los rebeldes filipinos, los Huks, que se enmontaron después de la Segunda Guerra Mundial y fueron confrontados por el gobierno con una mezcla de autoritarismo, primero, y de reforma agraria después, a fines de los años cincuenta, antes de que entraran en un proceso de involución, que a mediados de los sesenta los puso definitivamente fuera del espectro político, relevados por la moderna guerrilla. Por cierto, el éxito parcial del gobierno filipino alcanzó a tener algún eco en Colombia en los llamados planes de Rehabilitación de comienzos del Frente Nacional, el acuerdo bipartidista que puso término formal a la Violencia.

Boyaca”, la primera región de la cual fueron desarraigadas en los 80s, a “sangre y fuego”, no sólo las guerrillas sino de paso todas las manifestaciones de inconformidad social y política. El esquema prácticamente se replicó en la dolorosa “pacificación” de Urabá, en la frontera con Panamá, y se proponen extenderlo a todo el país. De las 55 masacres realizadas por motivos políticos entre octubre de 1995 y septiembre de 1996, por lo menos 32, equivalentes al 59,25% fueron atribuidas a paramilitares, 13 a las guerrillas, de las cuales 10 a las FARC.

Las autodefensas tienen múltiples antecedentes históricos: los ejércitos privados que jugaron un importante papel en las guerras civiles del siglo XIX; las policías privadas con que los terratenientes pretendieron neutralizar los conflictos agrarios en las primeras décadas del siglo XX, mucho más nítidamente las “contrachusmas”, “guerrillas de paz” y los célebres “Pájaros” de los años cincuenta, vinculados a un proyecto político-partidista. Pero más estrictamente, en su versión actual, las autodefensas surgieron bajo inspiración de la doctrina de la seguridad nacional que se extendió durante los 70s y los 80s por toda la América Latina, como parte de una estrategia mundial contra el comunismo. En su etapa formativa en Colombia recibieron apoyo financiero decisivo de las asociaciones de ganaderos y de los narcotraficantes, que se habían convertido en los nuevos señores de la tierra en amplias regiones del país. Con el tiempo y el colapso del comunismo, más que a un proyecto doctrinario, la dinámica de las Autodefensas, al igual que acontece con la guerrilla, responde a batallas más pragmáticas por territorios y por recursos. La mayor parte de sus operaciones son de represalia contra el secuestro, el abigeato y la extorsión.

Como en la violencia de los años 50, la venganza familiar es un componente central en la fase inicial de las Autodefensas. El padre del actual jefe de las Autodefensas fue asesinado por las FARC, y aquél con varios de sus parientes se propuso a comienzos de los 80s llevar a cabo la retaliación, que emprendió efectivamente en el noroeste antioqueño, “como un proyecto privado de restauración del orden público” (Ramírez Tobón, 1997: 139). Podría decirse, evocando la terminología que circuló en Centroamérica hace unos cuantos años, que las Autodefensas son las *Contras* de las guerrillas colombianas.

En desarrollo de su táctica de Ley del Talió, “ojo por ojo, diente por diente”, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá secuestraron en 1996 un alto número de familiares de la dirigencia guerrillera y forzaron a otros al exilio, para que, según sus palabras, los guerrilleros sintieran “en carne propia el horror del secuestro y la inhumanidad des esta práctica”. Varios de los retenidos fueron liberados posteriormente ante delegados de la Cruz Roja Internacional, la ONG holandesa Pax Christi y la Iglesia Católica como expresión de respeto al Derecho Internacional Humanitario, subrayando con ese mismo gesto sus diferencias con las guerrillas (*El Tiempo*, 29/3/1997) (18).

En regiones como Antioquia, y pese al rechazo ciudadano y las advertencias de los organismos internacionales de derechos humanos, las Autodefensas recibieron una

(18) Recordemos que bajo la dictadura Argentina y la “guerra sucia” de 1976 a 1983, el secuestro —la desaparición— y la tortura (en su doble dimensión, como instrumento punitivo y como instrumento judicial-investigativo) fueron los rasgos característicos de acción de organismos policiales y de la triple AAA.

especie de legalización encubierta a través de las llamadas CONVIVIR (Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, creadas mediante Decreto 356 de 1994), muy cercanas funcionalmente a las Rondas Campesinas que contribuyeron en el Perú a desvertebrar a Sendero Luminoso, y a las “patrullas civiles” que en Guatemala sembraron el terror en la década pasada (19). Las autodefensas colombianas, que se precian de ser la única fuerza contrainsurgente efectiva (en clara alusión a la ineficacia o desmotivación de las Fuerzas Armadas gubernamentales) materializan en el momento actual el tránsito de los viejos escuadrones de la muerte a una cierta masificación de la contrainsurgencia, a una “organización ciudadana en armas”, para retomar sus palabras.

Han venido ganando creciente protagonismo político; se postulan como la verdadera alternativa a la guerrilla; están asumiendo el tradicional papel antisubversivo del ejército. El ejército por tanto opera a menudo como simple retaguardia de esta nueva fuerza político-militar. Esta tendencia, vigorosamente cuestionada por organismos de derechos humanos, incluidos los de Estados Unidos, se refleja en las estadísticas que muestran la evolución reciente de los violadores de derechos humanos.

Violaciones de Derechos Humanos.

Evolución del porcentaje en relación con los actores armados 1993-1996

Años	Agentes Estatales	Grupos Paramilitares	TOTAL	Grupos Guerrilleros
1993	54,26	17,91	72,17	27,48
1994	32,76	35,33	68,09	31,91
1995	15,68	46,03	61,71	38,29
1996	10,52	62,69	73,21	26,79

Fuente: Comisión Colombiana de Juristas, 1996: 7.

Desde el punto de vista militar, las autodefensas sostienen que, a diferencia del ejército que libra una guerra regular contra la guerrilla, la de ellas es una guerra irregular, ya que, según sus manuales de historia militar, “no hay antecedentes en la historia en que un ejército regular haya derrotado a uno irregular. Un ejército irregular sólo se detiene con uno de las mismas características” (*El Tiempo*, 28/9/1997).

Como es apenas imaginable, el impacto sobre la población civil de esta nueva modalidad de confrontación es abrumador. Se estima que en 1998 hubo un total de 194

(19) En octubre del 1997, y en vísperas de una decisión de la Corte Constitucional sobre su *status* jurídico, se estimaba en 414 el número de tales asociaciones con un número aproximado de 3 531 afiliados (*El Tiempo*, Bogotá, 29/10/1997). El periodista y politólogo Hernando Gómez Buendía ha definido con precisión los dilemas de estas asociaciones: “las asociaciones de vigilancia rural son inútiles si respetan la constitución, y si son útiles, la violan.... Las Convivir existen **sólo** porque el Estado no es capaz de controlar los grupos armados; pero su legalidad depende de que el Estado pueda controlarlas como grupo armado” (*El Tiempo*, Bogotá, septiembre 9 de 1997). El fallo de la Corte Constitucional que respaldó su vigencia por la estrecha mayoría de 5-4 refleja tanto las incertidumbres sobre su legalidad, como las ambivalentes o divididas actitudes de la sociedad colombiana en general sobre ellas. (Véase *El Tiempo*, Bogotá, noviembre 7 y 8 de 1997).

masacres (asesinatos colectivos de más de tres personas), que se distribuyeron así: 103 atribuibles a las guerrillas y 91 a las Autodefensas (Vicepresidencia de la República, 1999: 6). El año de 1999, el último del siglo XX, impuso un nuevo récord de rutinización de la barbarie: 403 masacres y 1 865 víctimas, cuya autoría, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo (*Semana*, 2000), se estableció así, 38% las Autodefensas, 16% la guerrilla, 17% grupos armados, 1,4% fuerza pública, otros 2%. En términos comparativos, las masacres de ese solo año superan las de treinta años de guerra en Guatemala, pero ni la comunidad internacional se moviliza, ni a los actores armados parece inquietarles ese tipo de vigilancia. Y puesto que se busca aterrorizar a la comunidad circundante, golpear su precaria economía y dejar constancia sangrienta del control territorial, son masacres acompañadas a menudo de destrucción de viviendas, saqueo de víveres y despojo de animales. Los métodos se imponen cada vez más sobre los objetivos de la guerra. Tomemos otro indicativo, el *desplazamiento interno*. Entre 1985 y 1996 la cifra se aproximaba al millón de desplazados, el más alto porcentaje de ellos (45%) de Antioquia, el departamento con mayor número de masacres, seguido por Cesar (10%), Córdoba (8%), Santander (7%), Sucre (5%) y Caquetá (5%). El ritmo del ascenso es aún más preocupante: en 1995 fue de 89 510 desplazados, en 1996 se elevó a 181 010, atribuibles en un 33% a acciones desatadas por los paramilitares y 29% a acciones de las guerrillas, y en 1998, como se indicó antes, el número de desplazados se elevó a 308 000, siendo el caso más crítico el de la población petrolera de Barranca-bermeja (*El Tiempo*, 14/3/1997) (20). Y esto incluye, entre muchos otros, a campesinos, militantes sindicales o políticos, activistas de derechos humanos, representantes de las minorías indígenas y negras, y —semilla para futuras violencias— el 55%, son menores de 18 años. Como en todas las guerras, los más pobres, y los más débiles, mujeres y niños, sufren las peores consecuencias, agregándole nuevos ingredientes a las tradicionales fuentes de marginalización y vulnerabilidad.

El dilema, como se lo relató un campesino a un organismo de derechos humanos, es:

“Si nos quedamos nos matan, y si nos vamos nos queman las fincas”.

La gravedad de la situación es tal que recientemente fue creada una Consejería Presidencial para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia. El hecho es significativo, pero hay que advertir que, en este caso como en el de los reinsertados, los apoyos que se den a los desplazados pueden ser interpretados por los habitantes de las localidades de destino como privilegios inaceptables, o como agentes portadores de tensiones y conflictos (*El Tiempo*, 27/7/1997).

Hay sin embargo nuevos desarrollos de estos grupos de autodefensas, tanto en términos políticos como militares, desarrollos que están cambiando la naturaleza de la guerra en Colombia. En términos políticos están mostrando cada vez más preocupación con la imagen pública. Es así cómo en tanto que los textos de la “III° Cumbre Nacional” (s. f.) subrayaron que los obstáculos puestos por los organismos de derechos humanos a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas eran los que las habían colocado a ellas

(20) Según cifras suministradas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

a “la vanguardia de la *lucha*”, en la primera edición del periódico *Colombia Libre* (1997: 12-14) (21), por el contrario, dan precisas instrucciones a sus miembros sobre elementos del Derecho Internacional Humanitario aplicables al conflicto armado colombiano. Esto no puede ser tomado muy seriamente con actores que siguen cometiendo masacres en contravía de su nuevo discurso. Pero en octubre de 1997, expulsaron de la organización nacional a uno de sus comandos en el suroriente del país (Meta), por su responsabilidad en la masacre de una comisión de jueces. Durante las elecciones municipales y departamentales de octubre del mismo año exhortaron a sus seguidores a votar por el “Sí” al “Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad” —un plebiscito que contenía preguntas específicas sobre el el Derecho Internacional Humanitario (secuestro, participación de civiles y de niños en la guerra) y una clara determinación por la resolución pacífica del conflicto armado—. Las autodefensas (al igual que las guerrillas) controlan la delincuencia común en sus zonas; suministran créditos de largo plazo a los campesinos; y en algunas regiones ponen en practica su propia reforma agraria.

En términos militares, la expansión es también impactante. En una entrevista de 1997, el jefe máximo de las autodefensas, Carlos Castaño, afirmaba que en ese momento contaban con 20 frentes, cada uno de entre 100 y 150 hombres, y que su meta era disputarle a las FARC el sur de Colombia, los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo, que dicho sea de paso proveen a la guerrilla de su principal fuente de ingreso: las plantaciones cocaleras, que son la base del trabajo de pequeños campesinos, sin fuentes alternativas realistas de ingreso. La importancia estratégica de estas zonas se pone en evidencia si tomamos en cuenta los siguientes datos: las drogas (coca, heroína y los impuestos que pesan sobre ellas) representan, con el 50%, la primera fuente de ingreso de la guerrilla de las FARC (siendo la segunda el secuestro). Con un 20% las drogas representan la tercera fuente más importante de ingreso para el ELN (siendo la primera la extorsión a las compañías petroleras, y la segunda el secuestro) (Consejería Presidencial de Seguridad y Defensa Nacional, *in* Richani, 1997: 46). Esto muestra de paso la creciente diversificación de las finanzas de las guerrillas.

Es preciso resaltar que en el momento actual cinco municipios de la provincias sureñas de Caquetá y Meta, a saber, La Macarena, Mesetas, San Vicente del Caguán, La Uribe y Vista Hermosa, con un área total de 41 000 kilómetros cuadrados, y una muy baja densidad de población —aproximadamente 100 000 habitantes—, siguen bajo “despeje indefinido”. Este “despeje” consiste en el retiro total de las fuerzas armadas gubernamentales de dicha área, como marco geográfico de las conversaciones de paz que adelanta el gobierno del presidente Andrés Pastrana con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla que comanda el legendario

(21) En claro contrapunteo con las más chocantes prácticas guerrilleras, los otros temas de mayor prominencia en este primer ejemplar de las Autodefensas son: “El Crimen del Secuestro”, por la Comisión AUC de Asuntos Políticos; “Denunciamos. Violación de Derechos Humanos”, por la Comisión AUC para los Derechos Humanos, con instrucciones sobre tratamiento a la población civil y condena al uso inhumano de los niños en la guerra; y “Ecologicémonos. Preservación del Medio Ambiente”, por la Comisión AUC de Asuntos Ecológicos, con un plan de contención de los atentados dinamiteros contra oleoductos y refinerías, y la tala de bosques en parques naturales..

“Tirofijo” (Manuel Marulanda Vélez), un hombre que está en las montañas de Colombia desde 1949, subrayando de manera patética la continuidad entre la vieja violencia (de los 50s) y las recientes.

Con las autodefensas, por primera vez en Colombia, se consolida un movimiento contrainsurgente de proyección nacional. Ellas están hoy empeñadas en el reconocimiento político que les de algún papel definido en el proceso de negociación, dentro de la fórmula acuñada por el expresidente Samper de “*un solo proceso, dos mesas de negociación*”. El forcejeo en torno a este punto, que no ha tenido una clara definición por parte del presidente actual, Andrés Pastrana, puede conducir a un empantanamiento del proceso de paz. En efecto, en tanto que las FARC exigen al gobierno, como condición para avanzar en las negociaciones, demostraciones contundentes en la lucha contra las autodefensas, éstas a su vez exigen como condición para no sabotear el proceso que se les de el *status* de actor político-militar, en idénticas condiciones a las de la guerrilla. El secuestro en mayo de 1999 de la prestigiosa senadora del partido liberal, Piedad Córdoba, por parte de las autodefensas de Carlos Castaño para denunciar lo que llamaron “diplomacia guerrillera del partido liberal” puso las cosas en su máximo nivel de presión y de tensión, en momentos en que, sumado al creciente descontento militar y de otros sectores con la prolongación del “despeje”, por considerarlo una simple cesión de soberanía sin contraprestaciones, el gobierno pareciera perder la iniciativa en los asuntos centrales de la agenda de negociación. “Secuestrado el proceso de paz” fue el titular de uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Y las cosas no han cambiado de manera sustancial, como para suponer distinta percepción pública del proceso en el momento actual.

Significativamente, tanto las guerrillas como las autodefensas explican sus orígenes casi en idénticos términos: la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones económicas sociales y culturales (*origen de la guerrilla*), por un lado; e incapacidad para garantizar la seguridad pública, como es función esencial de cualquier Estado moderno con relación a la vida, la propiedad y las libertades ciudadanas (*origen de los paramilitares*). Aquí radica la esencia de la naturaleza de la crisis colombiana: dos rivales, contra un enemigo ausente, el Estado. El Estado no es ni regulador, ni guardián del orden. La guerra ha entrado pues en un acelerado proceso de privatización con la consiguiente deslegitimación del Estado y de las instituciones públicas.

4. PAZ PARCELADA, GUERRA PROLONGADA: LOS CAMBIANTES MODELOS DE NEGOCIACIÓN

Uno de los más sorprendentes rasgos de la endémica violencia colombiana, es que ha estado acompañada de un permanente (indefinido) proceso de negociación desde los 80s. Después de las primeras, pero inconclusas, negociaciones que se llevaron a cabo durante la administración del presidente Belisario Betancur entre 1982-1986, se firmaron acuerdos de paz con diferentes grupos: en 1990 con el M19; en 1991 con el EPL (Ejército Popular de Liberación), el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y el Quintín Lame; y en 1994, con la CRS (Corriente de Renovación Socialista). Este modelo de *negociaciones de paz por cuotas* da una imagen muy peculiar de Colombia a los analistas de resolución de conflictos, puesto que puede ser presentada

simultáneamente como ejemplo de negociación exitosa, como efectivamente lo fue hasta cierto punto en la América Central durante el primer año de la Administración Betancur, pero también puede ser considerada como un contraejemplo de conflicto interminable (22). *La paz dosificada es una guerra programada*. Las negociaciones parciales —parece ser la lección que va dejando la experiencia colombiana—, a la larga no restan a la magnitud del conflicto global, sino que sirven simplemente de espacio para el reacomodo de los actores principales de la guerra (23). Más aún, la tendencia demostrable, la norma, es que tras cada negociación, se producen nuevas escisiones, y nuevas radicalizaciones. Miremos con mayor detalle este aspecto. El modelo de negociación tiene desde luego fundamentos razonables: se negocia, ante todo con quienes quieren negociar, hay que tener en cuenta el diverso carácter de los grupos rebeldes, etc. Pero esta aproximación pragmática conlleva un inconveniente mayúsculo: la superposición, a menudo irreconciliable, entre los problemas de la guerra y las tareas de la paz. La transición de la insurgencia a la vida civil y a la paz permanente requiere, en efecto, una definición concertada de diversos temas cobijables bajo el concepto de la seguridad, tales como la depuración, el presupuesto y tamaño del ejército, la incorporación de los exguerrilleros a los aparatos armados del Estado, y por último y no menos importante, la reconsideración del papel de los militares con relación a la política. Con muchas dificultades estos han sido temas cruciales en El Salvador y Guatemala, con posterioridad a los acuerdos de paz. En Colombia, por el contrario, con su modelo de negociaciones parciales e inconexas, los necesarios ajustes son mucho más impredecibles. Veámoslo. Si uno acepta la paz, acepta la autoridad del Estado, acepta el legítimo monopolio de la fuerza por parte del Estado, a cambio de que éste le brinde las garantías que debe a todos los ciudadanos, en condición de tales, empezando por el derecho a la vida, y si uno se vuelve parte del Estado, del sistema existente, se convierte también por ese mismo hecho en “objetivo militar” de quienes prosiguen la guerra, a menudo sus antiguos compañeros de armas. Esto es exactamente lo que ha acontecido: uno de los grupos incorporados a la vida política, *Paz y Libertad*, antiguo EPL (Ejército Popular de Liberación) arguyó que entre 1991 y 1994, un elevado número de sus militantes, 274, habían sido asesinados, la mayoría de ellos, no por el ejército, no por los grupos paramilitares, sino por las guerrillas activas en sus antiguos bastiones, Córdoba y Urabá. Si a esto se agregan las inconsistencias de los organismos estatales que hacen que, mientras unas entidades sean instancias de mediación, otras lo sean simultáneamente de represión (asesinando a los propios negociadores o intermediarios), se entenderá el desamparo y orfandad en que van quedando los partidarios de la solución negociada. Pero aún aceptando el modelo de negociación que se puso en práctica con estos grupos, no debe perderse de vista que, al fin y al cabo, tanto el Estado como la sociedad receptora de los exguerrilleros han sido profundamente afectados por la guerra y por lo tanto deben prepararse conscientemente para la reinserción.

(22) Una útil presentación del caso colombiano dentro del marco de las teorías de resolución de conflictos es la de Hartlyn, 1993: 37-61.

(23) Comisión de Superación de la Violencia, *Pacificar la Paz*, Cinep-Comisión Andina de Juristas, (Bogotá, 1991). Esta Comisión fue coordinada por Alejandro Reyes Posada.

Asesinato de exguerrilleros.

Año	homicidios	34%	cometidos por	Guerrilla-FARC
1991	48	9%	"	Guerrilla disidente -EPL
1992	51	3%	"	Ejército
1993	76	3%	"	Policía Nacional
1994	99	2%	"	Grupos Paramilitares
	<hr/> 274	1%	"	Guerrilla-ELN

La lógica territorial de la paz parcelada consiste en que el espacio desocupado por uno de los actores, es inmediatamente reconquistado por otro con un discurso aún más radical que el precedente, que se apropia del nombre del grupo, de sus banderas, de sus insignias, de sus programas, de sus normas, de su acervo simbólico. Las negociaciones fragmentadas no conducen a un proceso acumulativo de la paz, sino a la reproducción de la violencia. La paz fragmentada es la guerra prolongada. La única negociación eficaz, podría decirse, es la negociación global, una negociación que involucre simultáneamente a todos los grupos.

Por otro lado, la transición de la vida guerrera, con sus rigideces y sus jerarquías, a la vida civil deliberante es muy compleja, no sólo en términos políticos sino también personales. Mientras se estaba en el colectivo comunidad-guerrilla, se anota en un estudio psicoanalítico, “el compromiso con la historia había borrado los compromisos familiares o aquellos que tuviesen sólo trascendencia individual”; ahora, con el retorno a la sociedad individualista, “para el reinsertado es casi insoportable pensar que a partir de ahora su vida está dedicada a superar problemas tan banales como el mercado, el arriendo, la pensión escolar” (24). El desprendimiento-desgarramiento del colectivo guerrilla, está acompañado de un cambio fundamental de los referentes cotidianos, que hace ver a menudo como inútil la vieja experiencia guerrera en los nuevos escenarios de la política y en las nuevas formas de organización social y cultural que deben emprender con posterioridad a la disolución de las formas organizativas político-militares. Incluso la misma imagen de los “reinsertados” como simples “beneficiarios” de los programas gubernamentales los convierten, como diría uno de ellos, en “víctimas de la paz”, es decir en sujetos pasivos, estigmatizados, y no activos de la paz (Henao, *in* Castro & Díaz, 1997: 110). Se repitió la historia: en la negociación del M19, del EPL y de los demás grupos se privilegió la reinserción política, relegando a un segundo plano la resinserción social.

Si a todo lo anterior se agrega la no rara retiscencia de la sociedad a la plena incorporación personal de los exguerrilleros a la vida profesional y productiva (25); los eventuales ajustes de cuentas o dificultades de readaptación por atrocidades cometidas

(24) Observación del psiconalista Javier Jaramillo Giraldo en su *Prólogo* al sugestivo libro de Castro & Díaz, 1997: iii.

(25) En una edición reciente de la revista *Alternativa*, se lee lo siguiente: “La respuesta de los colombianos (a los acuerdos) ha sido contradictoria. A pesar de aplaudir los procesos de paz, amplios sectores de la población critican al gobierno por considerar que millones de colombianos se encuentran en iguales o peores condiciones que los excombatientes y, sin embargo, no reciben la más mínima ayuda o atención por parte del Estado. De hecho, según Tomás Concha (el Coordinador General del Programa de Reinserción) ‘a uno le preguntan cuántos años hay que ser guerrillero o qué hay que hacer para que tengamos acceso a lo que tienen ellos?’”.

durante su vida de combatientes; el marginamiento deliberado o inconsciente de ellos en los organismos de representación (parlamento, concejos municipales); la resistencia de los caciques tradicionales de nivel regional a tolerar el pleno cumplimiento por parte del gobierno de compromisos como el de la favorabilidad política, que les daría representación automática en el parlamento y en las corporaciones regionales, por designación y no por elección, y por una vez, a los exguerrilleros, independientemente de su fuerza electoral; los continuos temores de las autoridades, justificados o no, de que los desmovilizados sirvan de cobertura para que los grupos aún activos realicen actos delincuenciales, obtengan beneficios judiciales (indultos), económicos (préstamos, subsidios) y políticos, que estarían reservados sólo para quienes han hecho manifestación expresa de “reinserción”; las limitaciones financieras, operativas y de concepción del Fondo de Paz; si tenemos en cuenta todos estos factores, repito, es posible entender por qué muchos de estos antiguos combatientes empiezan a añorar su vieja vida guerrillera, a tener nostalgia del sentimiento colectivo de seguridad, de poder y de pertenencia del que disfrutaban en la clandestinidad, en una palabra, a percibir su retorno a la vida civil como una pérdida de identidad, de ingresos y de prestigio. Lo peor que le puede ocurrir al proceso de paz hacia el futuro es que los que ya están comprometidos en el proceso de reinserción lo vean como una simple desposesión de las armas, como una mutilación simbólica, como una paz a pérdidas. En otras palabras, como un fracaso y no como una conquista de nuevas formas de relación social, de nuevos colectivos culturales y políticos, o de resignificación de sus ideales.

Un diagnóstico rápido sería suficiente para apreciar que lo que se ha venido realizando en materia de proyectos productivos, de distribución de tierras, de vivienda y de educación secundaria y universitaria para los viejos cuadros y militantes, resulta corto frente a las necesidades actuales. La tentación obvia es la del regreso a las armas, o peor aún, el camino de la delincuencia común.

Todo esto hace pensar en las ambivalencias de la reinserción (individualizada): desde un cierto punto de vista la reinserción, por definición, integra, pero desde otro, simplemente dispersa y desarraiga. El reinsertado sufre en su tratamiento por parte del Estado un verdadero descuartizamiento ideológico, pues se le trata separadamente como individuo, como actor político y como actor social.

Asumidas en serio, las negociaciones, como muy sugestivamente lo ha observado Malcolm Deas (1995: 73 y ss), pueden apuntar efectivamente tanto a contenidos materiales identificables, tales como recursos, organización, experiencia, armas, zonas de influencia, como a capitales simbólicos acumulados del siguiente tenor: el haber representado durante décadas el polo opositor; el ser los vengadores potenciales del atropello y la arbitrariedad; el haber sido los gestores o impulsores de muchas transformaciones institucionales.

Yo mismo he planteado el tema en términos de un necesario balance entre la deuda social de la sociedad con la guerrilla y la deuda histórica de la guerrilla con la sociedad (26). Un balance sobre el cual se puedan dar indicaciones, pero que esencialmente tiene que surgir del propio proceso negociador.

(26) Véase mi *Prólogo* a la segunda edición del libro de Villarraga S. & Plazas, 1995. El libro recoge precisamente las memorias de dos excombatientes.

Una mirada retrospectiva a los procesos de paz más recientes, puede mostrar ciertamente que las exguerrillas han dejado una marca muy importante en la gestación de nuevos derechos, en la estructuración de una nueva institucionalidad con vocación democrática y participativa, y en el reconocimiento de nuevas identidades político-culturales (Wills, 1993); pero desde otro punto de vista tales procesos dejan también un balance poco estimulante: el M19 después de haber jugado un decisivo papel como tercera fuerza en la Asamblea Constituyente de 1991, y de haber alcanzado una notable representación parlamentaria, fue prácticamente cooptado e invisibilizado políticamente; el EPL (Ejército Popular de Liberación) tras una reinserción traumática que no le permitió construir un perfil propio en la arena política, tomó la senda de la desintegración-desnaturalización de la mayoría de sus contingentes, muchos de ellos incorporados al paramilitarismo, y la CRS (Corriente de Renovación Socialista), con una fuerza menor en el parlamento, ha sido prácticamente invisibilizada.

Pasar de fuerza contestaria a eventual fuerza cogestora de la función pública es un viraje que requiere maduración y preparación, y desde luego, más allá del esfuerzo unilateral de los nuevos ciudadanos, compromisos de la sociedad y del Estado que le den al proceso el sentido de construcción colectiva.

De ahí las invocaciones al cambio de modelo de negociación. Se ha pasado en efecto en los últimos diez años de la *reincorporación individual de los exguerrilleros*, como sucedió también en la Violencia de los años 50-60, a la rehabilitación de las “zonas de violencia” y *reinserción de comunidades políticas o étnicas*, como sucedió durante la Administración Barco (1986-1990) y la Administración Gaviria (1990-1994), y de allí finalmente a lo que hoy se plantea: la *redefinición de un nuevo pacto político-social*, no para los reinsertados, no para las fuerzas insurgentes exclusivamente, sino *para la sociedad en su conjunto*.

El largo proceso de negociaciones, con sus altibajos y tropiezos, ha conducido en las dos últimas décadas a la desmistificación de la guerrilla, pero también a una desvalorización creciente del discurso de la paz.

Esto nos pone frente a un último y crucial interrogante: ¿cómo hacer deseable la paz?

5. REPOLITIZACIÓN, DESNARCOTIZACIÓN Y DESPOLARIZACIÓN: LOS TEMAS CRUCIALES DEL MOMENTO

Antes de dar elementos de respuesta a esta última pregunta es preciso insistir en la necesidad de esfuerzos continuos de repolitización del conflicto, no sólo de parte de la sociedad civil, sino del propio gobierno. Y para ello no debe perderse de vista que en Colombia el tiempo marcha contra los intereses de una negociación global. La contradicción, ya señalada, entre la expansión militar territorial de la guerrilla y su pérdida de espacios políticos en algunas zonas; la desarticulación organizativa e ideológica de muchos frentes guerrilleros; e incluso las palpables muestras de bandolerización y lumpenización en otros, son signos perturbadores. Ni a la guerrilla ni al país les conviene que en lugar de 10 000 guerrilleros, tengamos mañana 20 000 bandoleros, sumados a narcos, paramilitares y delincuentes comunes. Mil o dos mil

bandoleros fueron ya un trauma suficientemente grande para el país todavía rural de principios de los años sesenta, como para que nos olvidemos de él al examinar el curso de los acontecimientos presentes en el país de hoy, ya mayoritariamente urbano (27).

Aunque fuera de sus propias zonas (como sucedía también en las violencias pasadas) las guerrillas colombianas recurren cada vez más frecuentemente a prácticas que contradicen su discurso, como las operaciones terroristas y las masacres contra las bases sociales de sus presuntos o reales adversarios, hacia adentro, en cambio, y en el marco de una especie de racionalización espacial del ejercicio de la violencia, y así sea por una lógica puramente defensiva, y con métodos abiertamente autocráticos, tienen códigos que imponen severos límites a la delincuencia común, en tanto puede competir con sus aspiraciones de depositarias exclusivas de la fuerza (28). Cumplida esta penetración inicial en las comunidades campesinas, desalojadas las autoridades policiales y subordinada obligadamente la población a sus designios, la fase siguiente es la de su consolidación política, es decir el control del poder local y eventualmente de los recursos municipales, dando lugar a lo que parodiando los procesos institucionales de descentralización política, un analista ha calificado como la “descentralización armada” (Rangel Suárez, 1999: 43). Romper la hostilidad, forjar el consentimiento y lograr la colaboración, parecen ser los tres momentos acumulativos de esta relación que un autor ha descrito como el tránsito de una relación predatoria, a una relación parasitaria hasta llegar a una relación simbiótica (Taylor *in* Rangel Suárez, 1999: 44).

Esta preocupación de cómo hacer deseable la paz es uno de los principales temas del momento, por el simple hecho de que los contingentes guerrilleros de hoy poco tienen que ver con los pobres del campo que pudieron ser a mediados de los 60s. Nótese cómo los costos de la guerra y la rentabilidad de la paz son dos de las más recientes fórmulas incorporadas al lexico político colombiano. Por lo tanto, si el eje de las negociaciones en el pasado fue político (nuevas constituciones incluidas), el eje de las futuras negociaciones va a ser, con toda seguridad, social. Los alcances de las concesiones que habrá que hacer, dado el poder y la cobertura territorial de la guerrilla hoy, son aún impredecibles. Pero hay unos temas evidentes: condiciones de expropiación de las tierras en manos de narcotraficantes, y alternativas para su redistribución y uso productivo; inversión social en las zonas petroleras; nuevos términos de negociación y contratación con las multinacionales petroleras, ciertas formas de autonomía territorial; en suma, reformas más tangibles que una abstracta *Constitución Nacional*, y desde luego como lo plantearon las FARC en 1993 en su “Plataforma de Diez puntos para la Reconciliación y Reconstrucción”, perspectiva social y no militar en el manejo de los temas de la producción, consumo y comercialización de las drogas ilícitas. Es decir, diseño de una política integral que busque la salida a los cultivos ilícitos no en la

(27) Para una visión más amplia de este tema se puede ver, Sánchez & Meertens, 1997.

(28) Las FARC han venido recurriendo al terrorismo, especialmente en Urabá y Córdoba, zonas de las cuales los paramilitares las han venido expulsando sistemáticamente, y más recientemente lo han extendido a otras regiones del norte y del sur del país. Analistas políticos como Alfredo Rangel han venido subrayando la tendencia de la guerrilla colombiana a utilizar los métodos típicos de la ETA, y los de Pablo Escobar (la “escobarización”) en la época del narcoterrorismo. Ver, por ejemplo, *El Tiempo*, 2/3/1997 y 23/3/1997.

represión y el terror, ni en la fumigación aérea y la erradicación, como torpemente insisten las autoridades de Estados Unidos, provocando una catástrofe ambiental, sino en la formulación y financiación de programas de desarrollo alternativo para los cultivadores de coca y amapola en las diferentes regiones. Es decir, una clara distinción entre los asuntos y los intereses de los narcotraficantes y el trasfondo social de las zonas campesinas, para las cuales con o sin insurgencia, el cultivo de la materia prima para las drogas es una necesidad, particularmente en las regiones de reciente colonización, como Meta en el suroriente o Guaviare, Caquetá y Putumayo en la amazonia colombiana. La presencia decisiva de las guerrillas en estas zonas las podría convertir ante la comunidad internacional y sobre todo ante los Estados Unidos, en las verdaderas garantes de una solución duradera al cultivo de productos sicoactivos (Vargas Meza, 1999: 49).

Todo esto sugiere una creciente interacción de los temas de las drogas con los de las guerrillas (recuérdense sus fuentes de ingreso). Es lo que se ha llamado la narcotización del proceso de paz y la narcotización de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. En efecto, con la centralidad del tema de las drogas, que opera como sustituto del enemigo ideológico que colapsó con el Muro de Berlín, el conflicto colombiano ha pasado por esta vía al primer plano de las preocupaciones de los Estados Unidos. Este es el tema central en el dilema de Washington: o presionar para la negociación, o crear la legitimidad de alguna forma de intervención. ¿Cuál es el camino a seguir?

Los principios que han venido inspirando la acción gubernamental, en acuerdo con las principales fuerzas políticas, son:

5. 1. El reconocimiento del carácter político de la guerrilla

Esto significa aceptar primero que, a pesar de muchas de sus prácticas condenables, no son simples bandidos, terroristas o narcoguerrilleros, sino rebeldes con ideología, recursos, y objetivos específicos contra el orden existente, es decir, que al menos teóricamente y a diferencia de las mafias, acumulan recursos y poder con una pretensión colectiva. Segundo, este reconocimiento implica la aceptación de la imposibilidad de una victoria militar, y por consiguiente la necesidad de una salida negociada. El más contundente reconocimiento del carácter político de las guerrillas lo dio el actual presidente Pastrana, primero como candidato y luego como presidente en ejercicio, al encontrarse personalmente en las montañas de Colombia dos veces con el líder máximo de las FARC.

No se trata siempre, en todo esto, de asuntos de principio. Estos reconocimientos expresan las cambiantes relaciones de fuerza entre los rebeldes y el Estado. Entre 1990 y 1992, después de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría las expectativas oficiales eran de que las guerrillas verían en el futuro inmediato reducida su capacidad en muchos niveles. Sin embargo, la enorme autonomía financiera que estas guerrillas lograron con respecto a sus apoyos externos y la tremenda amenaza que las políticas internacionales de erradicación de las drogas representaba para amplios sectores del campesinado, le brindaron a las guerrillas inesperadas bases sociales y relegitimación política, a pesar de las involuciones que se han señalado en otras partes de este ensayo.

El modelo de negociación con estas guerrillas no podrá ser ya el de la reinserción-atomización. En ello parece haber ya un claro consenso. Modelo de desarrollo social y político y poder territorial, serán elementos indisociables en el curso de las negociaciones.

5. 2. Aplicación del Derecho Internacional Humanitario

Esto significa reconocimiento de que incluso si el conflicto se perfilara como insoluble, debería ser “civilizado”, es decir, sometido a las históricamente mínimas normas de la guerra. Ello incluye muchos de los temas a los cuales nos hemos referido a lo largo de este ensayo, como el secuestro, la desaparición forzada, el tratamiento de prisioneros, el reclutamiento de niños (cada vez más involucrados en la guerra como víctimas y como combatientes), protección de abusos físicos y sexuales a las mujeres atrapadas en la guerra, prohibición del uso de minas antipersonales, etc. Éste es quizás, después de las drogas, el aspecto en el que se percibe una mayor y creciente vigilancia internacional del proceso político colombiano y toca permanentemente con la necesidad de una reforma militar que reinstale la acción represiva dentro de los marcos de la legislación nacional e internacional.

Aunque se trata de normas permanentemente violadas, operan como un horizonte ético de la guerra y como principios universales cuyo cumplimiento o desconocimiento puede definir el grado de legitimidad internacional y el sentido de otras dimensiones internacionales del conflicto: o bien la *mediación internacional* o la *intervención humanitaria*, con perfiles de presión o de intervención militar multinacional. En todo caso los esfuerzos mediadores por parte de Naciones Unidas en una región que se considera de dominio natural de los Estados Unidos, van a estar aún más limitados por la ineficacia o impotencia mostrada por la ONU en los numerosos conflictos interestatales que han estallado o se han agravado simultáneamente en el África: Uganda-Rwanda, Etiopía-Eritrea, Angola-Sudán; a los cuales habría que sumar las guerras civiles reactivadas en el Congo, en Zimbabwe y en Sierra Leona.

Gran expectativa reina hoy en Colombia y en los países vecinos en torno al rumbo de la política de los Estados Unidos con respecto a la situación del país en los años venideros. De hecho, los Estados Unidos están involucrándose cada vez más y bajo múltiples formas en el conflicto colombiano. La aprobación y puesta en marcha del Plan Colombia muestra una determinación que ya no tiene marcha atrás. Colombia es hoy por hoy el tercer más importante receptor de ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto. Europa, entre tanto, apenas se asoma tímidamente, sin arriesgar el diseño de un plan autónomo frente a los americanos, que apunte a las condiciones sociales de la negociación y la paz.

Dependiendo de todos estos desarrollos y del tipo de presiones internacionales, el conflicto tomará pues uno de los siguientes caminos: o bien una mayor polarización entre guerrillas y autodefensas, o un creciente papel mediador de organizaciones civiles e internacionales, en lo que el internacionalista Juan Gabriel Tokatlán ha llamado una “diplomacia ciudadana” por la paz (*El Tiempo*, 13/9/1999). En todo caso, la situación actual es, en el largo plazo, insostenible.

5. 3. La negociación en medio de la guerra

Este principio de acción fue aceptado como un presupuesto natural de la agenda de paz, pero con el curso del tiempo se ha visto la necesidad de ponerle acotaciones, rescatando la fuerza simbólica de ciertos rituales que puedan ser vistos como signos generadores de confianza en la solidez de las negociaciones. Para la sociedad lo deseable sería la tregua, es decir la suspensión de las operaciones armadas mientras se avanza en la mesa de negociaciones. Lo demás es simplemente la aceptación realista o resignada de la dinámica entre guerra y política (guerra como continuación de la política, política como continuación de la guerra por otros medios) tal como la definiera Clausewitz durante las guerras napoleónicas. Y finalmente, y probablemente más importante hoy en Colombia,

5. 4. Participación de la sociedad civil

En contraste con la pasividad frente a los procesos de negociación anteriores se advierte, hoy en efecto, una activa participación de la sociedad civil en la gestión de propuestas, en la mediación, en la construcción de escenarios de negociación a través de sus múltiples expresiones, y en la fuerza vinculante de los eventuales acuerdos. Ejemplos de esta nueva perspectiva son ilustrativos en la Iglesia, que ha encontrado en la paz un eje de recuperación de lazos perdidos con sus bases sociales; en los industriales —la empresa privada en general— que cada vez más se ven forzados a reconocer que tarde o temprano tendrán que negociar aspectos fundamentales del modelo económico; en los sindicatos, en los nuevos movimientos sociales y en las ONGs que tendrán que demostrarle a los actores armados las bondades de la acción política para despolitizar el conflicto. El inmediato futuro depende mucho de la capacidad de autonomía que la sociedad civil pueda ganar frente a los contendores armados. Pero en todo caso se reconoce ya que el contenido del itinerario de las negociaciones, en tanto que puesta en escena de múltiples demandas democráticas, no es asunto exclusivo de una cúpula política y una cúpula guerrillera. Las multitudinarias marchas contra el secuestro en todo el país que han unido los polos sociales y los niveles local, regional y nacional, son un indicio claro de la irrupción o del renacimiento, mejor, de una opinión pública, bloqueada durante años por el narcoterrorismo (Pécaut, 1999: 203), y del despertar de esta sociedad civil que quiere jugar un papel más protagónico en los temas de la guerra y la paz en Colombia. La Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), la Comisión Nacional de Reconciliación, el Mandato Ciudadano por la Paz, entre otros, hacen parte de ese amplio abanico de actores que buscan jugar su propio rol en las negociaciones.

Pero, y es la conclusión abierta que debe sacarse de lo aquí expuesto, el problema central de Colombia hoy no puede reducirse a la paz, entendida como simple cese de hostilidades. El problema básico, como se ha señalado en múltiples estudios (29), es el de la democracia, que desde luego desborda la agenda guerrillas-Estado. Además de los temas enunciados, habrá que pensar entonces en otros que apunten a una reconfiguración de las relaciones de poder; a una reorientación básica de la inversión pública; a una reforma

(29) Véase una primera formulación en el trabajo de la Comisión de Estudios de la Violencia, *Colombia: Violencia y Democracia*, ya citado y, más recientemente, el ensayo de Palacios, 1999: 59-107.

agraria que satisfaga necesidades aplazadas de los campesinos; a un ensanchamiento de los espacios políticos; a nuevas formas de relación entre las periferias y el Estado central. Habrá que pensar en suma en las condiciones de construcción de un acuerdo nacional, que simbólicamente permita redefinir al país como una nueva *comunidad política consensuada*. En estas condiciones, Colombia es quizás el país de América Latina que con mayores responsabilidades ha entrado al siglo XXI. El desenlace le concierne a Colombia pero también a la comunidad internacional.

Referencias citadas

- ALAPE, A., 1995 - *Ciudad Bolívar: La Hoguera de las Ilusiones*, 272p.; Bogotá: Editorial Planeta.
- BEJARANO, J. A., ECHANDÍA, C., ESCOBEDO, R. & LEÓN QUERUZ, E., 1997 - *Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Areas Rurales*, 255p.; Bogotá: FONADE/Universidad Externado de Colombia.
- BRAUN, H., 1994 - *Our Sidewalks, A Journey into the Violence of Colombia*, 239p.; University Press of Colorado.
- CAMACHO GUIZADO, Á. & GUZMÁN BARNEY, Á., 1996 - La Violencia Urbana en Colombia: Teorías, Modalidades y Perspectivas. Ponencia presentada en el Seminario sobre "Violencia, Terrorismo y Secuestro", organizado por el Programa La Casa, Universidad de los Andes, Bogotá, 20-21 de marzo de 1996.
- CASTRO, M. C. & DÍAZ, C. L., 1997 - *Guerrilla, Reinserción y Lazo Social*, 210p.; Bogotá: Almudena Editores.
- COLOMBIA LIBRE, 1997 – Órgano de Divulgación de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C, Julio de 1997, N° 1.
- COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, 1996 - Colombia, Derechos Humanos y Derecho humanitario, 335p.
- COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA, 1995[1987] - *Colombia: Violencia y Democracia*; Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 4a ed.
- DEAS, M. & GAITÁN DAZA, F., 1995 - *Dos Ensayos Especulativos sobre la Violencia en Colombia*, 415p.; Bogotá: FONADE: DNP.
- DEGREGORI, C. I., CORONEL, J., PINO del P. & STARR N., O., 1996 - *Las Rondas Campesinas y la Derrota de Sendero Luminoso*, 269p.; Lima: IEP – Universidad San Cristóbal de Huamanga. Colección Estudios de la Sociedad Rural N° 15.
- ECHANDÍA, C., 1999 - Expansión Territorial de las Guerrillas Colombianas: Geografía, Economía, Violencia. In: *Reconocer la Guerra para Construir la Paz* (M. Deas & M. V. Llorente, comp.): 99-149; Bogotá: Uniandes/CEREC/Norma.
- EL TIEMPO, 1995 - Bogotá, 9 de julio de 1995.
- EL TIEMPO, 1996 - Bogotá, 13 de septiembre de 1996.
- EL TIEMPO, 1997 - Bogotá, 2 de marzo de 1997.
- EL TIEMPO, 1997 - Bogotá, 23 de marzo de 1997.
- EL TIEMPO, 1997 - Bogotá, 29 de marzo de 1997.
- EL TIEMPO, 1997 - Bogotá, 27 de julio de 1997.
- EL TIEMPO, 1997 - Bogotá, 28 de septiembre de 1997.
- EL TIEMPO, 1997 - Bogotá, 29 de octubre de 1997.
- EL TIEMPO, 1999 - Bogotá, 13 de septiembre de 1999.

- FRANCO, S., 1999 - *El Quinto: No matar. Contextos y explicaciones de la violencia en Colombia*, 208p.; Bogotá: Tercer Mundo Editores/IEPRI.
- GARCÍA MÁRQUEZ, G., 1996 - *Noticia de un Secuestro*, 301p.; Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- GUTIÉRREZ, F., 1999 - Imprecisiones sobre la violencia. *Revista de Ciencias Sociales*, N° 3; Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes.
- HARTLYN, J., 1993 - Civil Violence and Conflict Resolution: The Case of Colombia. In: *Stopp the Killing. How Civil Wars End* (Roy Licklider, Ed.): 37-62; New York University Press.
- HENAO, I., 1997 - Reconstrucción del imaginario de Proyecto de Vida en la reincorporación social del guerrillero. El Poder de lo simbólico. In: *Guerrilla, Reinserción y Lazo social* (M. C. Castro & C. Lucía Díaz): 101-135; Bogotá: Almudena Editores.
- JARAMILLO, A. M., CEBALLOS MELGUIZO, R. J. & VILLA MARTÍNEZ, M. I., 1998 - *En la Encrucijada: Conflicto y Cultura Política en el Medellín de los Noventa*, 253p.; Medellín: Corporación Región.
- KISSINGER, H. A., 1995 - The Viet Nam Negotiations. *Foreign Affairs*, vol. 47, N° 2 (enero 1969). In: *Elusive Peace. Negotiating an End to Civil Wars* (William Zartman, editor); Washington D.C.: The Brookings Institutions.
- KRAUTHAUSEN, C., 1998 - *Padrinos y Mercaderes. Crimen organizado en Italia y Colombia*, 475p.; Bogotá: Editorial Planeta.
- LEBOT, Y., 1995 - *La Guerra en Tierras Mayas: Comunidad, Violencia y Modernidad en Guatemala (1970-1992)*, 327p.; México: Fondo de Cultura Económica.
- LLORENTE, M. V., 1999 - Perfil de la Policía colombiana. In: *Reconocer la Guerra para Construir la Paz* (M. Deas & M. V. Llorente, compiladores): 389-473; Bogotá: Ediciones Uniandes/CEREC/Norma.
- ORTIZ SARMIENTO, C. M., 1991 - El sicariato en Medellín: entre la violencia política y el crimen organizado. *Análisis Político*, 14: 60-73; setiembre-diciembre.
- MELUK, E., 1998 - *El Secuestro : Una Muerte Suspendida. Su Impacto psicológico*, 372p.; Bogotá: Programa Presidencial para la Defensa de Libertad Personal/Fundación País Libre/Ediciones Uniandes.
- NIÑO MURCÍA, S., LUGO TORRES, N., ROZO MONTEJO, C. & VEGA U., L. A., 1998 - *Territorios del Miedo en Santafé de Bogotá. Imaginarios de los ciudadanos*, 136p.; Bogotá: Tercer Mundo Editores/Observatorio de Cultura Urbana.
- PALACIOS, M., 1999 - Agenda para la democracia y negociación con las guerrillas. In: *Los Laberintos de la Guerra* (Francisco Leal, edit.): 59-107; Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- PÉCAUT, D., 1997 - Presente, Pasado y Futuro de la violencia. *Análisis Político*, 30: 3-36; Bogotá, enero-abril.
- PÉCAUT, D., 1999 - Estrategias de Paz en un contexto de diversidad de actores y factores de violencia. In: *Los Laberintos de la Guerra: Utopías e incertidumbres sobre la Paz* (Francisco Leal Buitrago, edit.): 193-242; Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- PÉREZ GUZMÁN, D. & MEJÍA, M. R., 1996 - *De Calles, Parches, Galladas y Escuelas*, 230p.; Bogotá: CINEP.
- POLICÍA NACIONAL, 1998 - *Criminalidad*, N° 41, 450p.; Bogotá: Imprenta Fondo Rotatorio de la Policía.
- PUTMAN, R. D., 1993 - *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*, 258p.; Princeton University Press.
- RAMÍREZ TOBÓN, W., 1997 - *Urabá: los inciertos confines de una crisis*, 174p.; Bogotá: Editorial Planeta.
- RANGEL SUÁREZ, A., 1999 - Las FARC-EP: Una mirada actual. In: *Reconstruir la Guerra para Construir la Paz* (M. Deas & M. V. Llorente edit.): 21-51; Bogotá: Ediciones Uniandes/CEREC/Norma.

- REINA, M., 1996 - La mano invisible. Narcotráfico, economía y crisis. in: *Tras las huellas de la crisis política* (F. Leal Edit.): 153-179; Bogotá: Tercer Mundo Editores/Fescol/Iepri.
- RICHANI, N., 1997 - The Political Economy of Violence: the War-System in Colombia. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 39, N° 2: 37-81.
- RUBIO, M., 1999 - *Criminalidad e Impunidad. Precisiones sobre la violencia*, 269p.; Bogotá: Tercer Mundo Editores/CEDE.
- SALAZAR, A., 1990 - *No Nacimos P'a Semilla*, 223p.; Bogotá: Corporación Región/Cinep.
- SALAZAR, A., 1993 - *Mujeres de Fuego*; Medellín: Corporación Región.
- SALAZAR, A. & JARAMILLO, A. M., 1992 - *Medellín: Las Subculturas del narcotráfico*, 160p.; Bogotá: CINEP.
- SANCHEZ, G., 1991 - *Guerra y Política en la Sociedad Colombiana*, 228p.; Bogotá: El Ancora Editores.
- SÁNCHEZ, G. & MEERTENS, D., 1997[1983] - *Bandoleros, Gamonales y Campesinos (El caso de la Violencia en Colombia)*: 255p.; Bogotá: El Ancora Editores. Prólogo de Eric Hobsbawm. 5a reimpresión.
- SEMANA, 2000 - *Barbarie nacional*, mayo 1-8 de 2000.
- STANNOW, L., 1996 - Social Cleansing in Colombia. M.A. Thesis, Simon Fraser University, 155p.
- TAYLOR, J., 1993 - Aides-memoirs and Collective Amnesia in the Wake of the Argentine Terror. In: *The Body Politic* (M. Ryan ed.): 192-203; Boulder: Westview Press.
- TERCERA CUMBRE NACIONAL MOVIMIENTO AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, s.f. - panfleto mimeo, sin lugar.
- TUAN, Y., 1979 - *Landscapes of Fear*, 262p.; New York: Pantheon Books.
- TURNER, M., 1998 - Kidnapping and Politics. *International Journal of the Sociology of Law*, 26(2): 145-160, June.
- URIBE, M. T., 1977 - La negociación de los conflictos en las viejas y nuevas sociabilidades. in: Varios Autores *Conflicto y Contexto: resolución alternativa de conflictos y contexto social*: 165-180; Bogotá: Tercer Mundo Editores/Instituto Ser de Investigaciones/Colciencia/Programa de Reinserción.
- URIBE, M. V., 1992 - *Limpiar la Tierra. Guerra y Poder entre Esmeralderos*, 150p.; Bogotá: Cinep.
- URIBE M. T., 1993 - La reinserción en Urabá un Proceso Inconcluso. In: *Los Caminos entre la Guerra y la Paz. La Reinserción*: 29-37; Bogotá: Fondo Ediltorial para la Paz/Fundación Progresar, Primer volumen.
- URIBE, M. T., 1997 - Antioquia: entre la Guerra y la Paz. In: *Estudios Políticos*, N° 10: 126-137; Medellín: Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, enero-junio.
- VARGAS MEZA, R., 1999 - *Drogas, Máscaras y Juegos. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia*, 214p.; Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- VARIOS AUTORES, 1994 - *Rostros del Secuestro*, 324p.; Bogotá: Editorial Planeta.
- VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1999 - *Observatorio de los Derechos humanos en Colombia*, Boletín N° 1, junio.
- VILLARRAGA S., Á. & PLAZAS N., N., 1995 - *Para Reconstruir los Sueños. Una Historia del EPL*, 470p.; Bogotá, Fundacion Progresar, 2a edición. Prólogo de Gonzalo Sánchez.
- WILLS, M. E., 1993 - Las Políticas gubernamentales frente al proceso de paz: entre el peso del pasado y un futuro incierto. In: *Gobernabilidad en Colombia* (E. Ungar, edit.): 129-186; Bogotá: Universidad de los Andes.